

ANÁLISIS CONSTITUCIONAL Y PENAL SOBRE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

**DIMARLYNK BASTIDAS CRUZ
YUDY MARCELA HINCAPIÉ MOLINA**



**UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CALI
FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
SANTIAGO DE CALI
2014**

ANÁLISIS CONSTITUCIONAL Y PENAL SOBRE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

**DIMARLYNK BASTIDAS CRUZ
YUDY MARCELA HINCAPIÉ MOLINA**

**Monografía de grado como uno de los
requisitos parciales para optar al título de
Abogado**

**Presidente
Dr. WILDEMAN MURIEL PENILLA**



**UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CALI
FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
SANTIAGO DE CALI
2014**

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE
SECCIONAL CALI

Dra. ESPERANZA PINILLOS SAAVEDRA
Delegada Personal del Presidente Nacional

Dr. LIBARDO OREJUELA DÍAZ
Rector Seccional

Dr. OMAR BEDOYA LOAIZA
Secretario Seccional

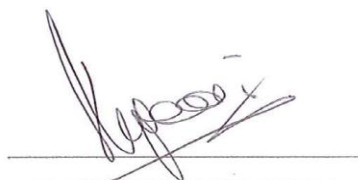
Dr. JOSÉ HOOVER SALAZAR RÍOS
Decano Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

Dra. OFELIA CECILIA DORADO ZÚÑIGA
Secretaria Académica Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

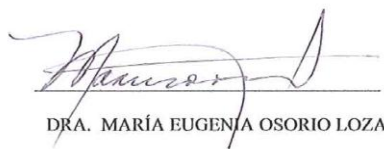
Dra. PATRICIA GALARZA GONZALEZ
Directora CIFADER

PÁGINA DE ACEPTACIÓN

De conformidad con la NTC (Norma Técnica Colombiana) 1486, esta página contiene las firmas de quienes participaron en la revisión, sustentación y aprobación del trabajo de grado y hace parte del cuerpo de la Monografía, pero no tiene ningún efecto académico, ni reemplaza la resolución aprobatoria de trabajo de grado.



DR. WILDEMAN MURIEL PENILLA



DRA. MARÍA EUGENIA OSORIO LOZANO



DR. JAIRO VLADIMIR LLANO FRANCO

Santiago de Cali, 24 de mayo de 2016

DEDICATORIA

Este trabajo principalmente se lo queremos dedicar a Dios quien fue nuestro guía espiritual y ha sido nuestra fuente de inspiración para terminar este trabajo, a nuestras madres quienes han sido un pilar fundamental en todo este proceso que es nuestra carrera profesional por darnos ánimos y apoyo todo el tiempo. A nuestros familiares y amigos quienes nos han acompañado en todo este proceso y nos han dado su apoyo incondicional.

AGRADECIMIENTOS

Primero que todo queremos darle las gracias a Dios quien nos dio la vida y las fuerzas para culminar nuestra carrera profesional, a nuestros padres quienes nos brindaron su apoyo económico y moral durante todo este proceso.

A la UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA- SECCIONAL CALI por darnos la oportunidad de estudiar y crecer como Profesionales.

A nuestro director de Tesis Dr. WILDEMAN MURIEL PENILLA quien nos apoyó incondicionalmente durante el desarrollo de este trabajo, gracias por darnos su conocimiento y experiencia para realizar y terminar este trabajo.

A nuestros jurados el Dr. VLADIMIR LLANOS y la Dra. MARIA EUGENIA OSORIO LOZANO por ayudarnos a corregir nuestro trabajo, por brindarnos su conocimiento y experiencia para culminar de manera exitosa este trabajo de grado.

Mil gracias a todos...

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	9
ANÁLISIS CONSTITUCIONAL Y PENAL SOBRE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	11
1 ANÁLISIS CONCEPTUAL SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN CONTEXTO JURÍDICO	11
1.1 Violencia intrafamiliar: revisión nacional	13
1.2 Tipos de maltrato en contexto de violencia intrafamiliar	15
1.3 Generalidades sobre contexto jurídico y violencia intrafamiliar	23
2. LEGISLACIÓN VIGENTE PARA AFRONTAR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	
2.1 De los Derechos Humanos y los indicativos jurídicos internacionales contra la violencia intrafamiliar	27
2.2 La Constitución Política de Colombia, soporte jurídico contra la violencia intrafamiliar	33
2.3 Marco Legal colombiano	36
3. LA LEY Y SUS APERTURAS JURISPRUDENCIALES	40
3.1 La jurisprudencia en acción de protección	42
3.2 La violencia intrafamiliar en la jurisprudencia colombiana	56
3.2.1 La Corte Suprema de Justicia en ejercicio jurisprudencial	58
3.3 Del análisis a la práctica	68
4. CONCLUSIONES	78
BIBLIOGRAFÍA	83
CIBERGRAFÍA	86

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Proceso de la medida de protección	53
Figura 2. Incidente de incumplimiento de la medida de protección	55

INTRODUCCIÓN

La violencia intrafamiliar es un fenómeno casi invisible, dada su repercusión social, que muchas veces no se denuncia y hace que los integrantes de la familia la acepten como medio para solucionar los conflictos. Lo anterior significa que las estrategias para erradicar todas las conductas de violencia intrafamiliar son fundamentales pues estas son numerosas y variadas y azotan los espacios familiares. En Colombia, según el Observatorio del Delito, del 2003 al 2013 se registraron 209.560 casos de violencia intrafamiliar a nivel nacional, siendo el año 2012 el de mayor participación con 30.628 hechos, seguido del 2011 con 26.425.

Desde el año 2007, la Alcaldía de Santiago de Cali formuló una política pública de convivencia familiar (Acuerdo 0231, reglamentado por el decreto 0206 de 2008), que tiene el plan, entre otros, de orientar las intervenciones sectoriales e intersectoriales que se adelanten en el municipio en el tema de violencia intrafamiliar. A su vez, los resultados del Observatorio de Violencia Intrafamiliar del municipio revelaron que en el año 2012, la casa continúa siendo el escenario donde más se presenta la violencia intrafamiliar. Con estas realidades en contexto se considera necesario hacer un análisis constitucional y penal sobre la violencia intrafamiliar que aporte a la real injerencia que sobre esta problemática de salud tienen las políticas públicas como escenario concreto de actuación interdisciplinar en la comunidad. Por lo que consideramos importante realizar una indagación jurídica para conocer los tópicos de Ley y jurisprudencia que comprometen el tratamiento jurídico de la violencia intrafamiliar y con ello, identificar los alcances de operacionalización de la política pública de la ciudad de Cali en esta área.

Por lo anterior, se elaboró un trabajo monográfico que demandó la consulta de varias fuentes bibliográficas, las cuales se han citado en el desarrollo del texto y se relacionan en la respectiva bibliografía y cibergrafía. Monografía que está compuesta por tres capítulos; en el primero se realiza una reseña conceptual del

concepto de violencia intrafamiliar, en la que se observa cómo desde el referente de *desequilibrio del poder* al interior de la familia, tal fenómeno social recae en los actores sociales como la mujer y los niños. Seguidamente se presentan las diversas tipologías de la problemática de la violencia intrafamiliar. Para finalizar, con una revisión generalizada sobre el contexto jurídico que enmarca la violencia intrafamiliar.

El segundo capítulo es una recopilación de la legislación vigente sobre violencia intrafamiliar, en la que se reseñan algunas debilidades y fortalezas de las normas en Colombia respecto tanto del tratamiento que le da al fenómeno de violencia dentro de las familias, como la evidencia de que atiende las demandas internacionales en materia de protección de los derechos humanos.

Finalmente, en el tercer capítulo de la monografía se presentan expresiones de la jurisprudencia y las políticas públicas, ambos escenarios como posibilidad de puesta en práctica de la Ley en favor de la protección de la familia contra la violencia en su interior; para hacerlo, por un lado, son presentadas algunas apuestas de la Corte Suprema de Justicia en el marco de sus sentencias, y por otro, se pone sobre la mesa la situación de las políticas públicas en el contexto de la ciudad de Cali, como pauta para dejar en evidencia la necesidad que se tiene de reconocer este espacio como actor social y político activo en materia de viabilización de las acciones legales y penales contra la violencia intrafamiliar.

Entre las conclusiones se articula el entramado que permite observar el análisis adelantado a la Ley, la jurisprudencia y la política pública como origen legislativo, el primero, ejercicio y aplicación de la norma en el segundo y, por último, la necesidad de fortalecimiento del tercero como nicho de mediación para el acompañamiento efectivo a los actores de la familia, en especial a los niños y la mujer, en procesos de solicitud de acciones de aplicación de la Ley y de protección.

ANÁLISIS CONSTITUCIONAL Y PENAL SOBRE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

1. Análisis conceptual sobre violencia intrafamiliar en contexto jurídico

Sin más pretensiones que la de poder transmitir un conocimiento sobre la acción de protección contra la violencia intrafamiliar, se presenta a continuación no sólo los términos de su existencia, sino también su envergadura, su naturaleza, su importancia y su contundencia, la que, en términos de Zárate (2009) se considera un aspecto que, curiosamente, poco conocen la comunidad, las potenciales víctimas y las mismas instituciones.

En principio se tiene en cuenta que la familia tiene entre sus derechos el de inviolabilidad a su intimidad, pero ello no supone que alguien pueda encubrirse en estos para evitar que el Estado actúe frente a circunstancias de violencia en su interior. La familia no es un espacio de impunidad. Y en tanto tal, las autoridades (Comisarías de Familia) tienen plenas facultades legales para intervenir de una manera decidida y con acciones afirmativas¹ para hacer cesar, erradicar y sancionar la violencia.

Desde el concepto sociológico, la familia se puede definir como:

... un grupo social, armónico y solidario, con residencia en común, cooperación económica y funciones de reproducción y estricto sensu, formado por una familia nuclear, padres e hijos, y lato sensu, como en el caso de la familia extendida, dos o

¹ La Corte Constitucional Colombiana, en múltiples oportunidades, ha sostenido que la interpretación sistemática de la Constitución de 1991 permite concluir que las autoridades públicas pueden adoptar medidas para favorecer a un grupo de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad producida por desigualdades culturales, históricas, sociales o económicas.

más familias nucleares mediante la extensión de la relación padre-hijo, o sin dicha extensión, padres, hijos y otros parientes de consaguinidad, por afinidad. Herrera (2001, p. 33)

La familia se reconoce como el núcleo fundamental de la sociedad, lo cual también hacía la Constitución de 1886, pero por primera vez en Colombia según el artículo 42 de la Carta Magna se consagra que:

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.

Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley.

Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progeneración responsable.

La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos.

Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil.

Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley.

Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil.

También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley.

La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes (p.28).

Entonces, la familia puede tener como fuente no solamente el matrimonio sino la sola voluntad libre de un hombre y una mujer de conformarla, así pues la familia puede estar afianzada en vínculos jurídicos o en vínculos naturales, resalta la norma, eso sí, que tratándose de familia con fundamento en el matrimonio o en la sola voluntad de una pareja de conformarla, debe surgir siempre entre un hombre y una mujer, aspecto que igualmente consagra el artículo 113 del Código Civil, cuando define el matrimonio como “un contrato solemne por medio del cual un hombre y una mujer se unen con el ánimo de convivir, procrear y auxiliarse mutuamente” (p.52).

1.1. Violencia intrafamiliar: revisión nacional

Según Azaola (2005) en su estudio sobre la violencia intrafamiliar en general y sobre el maltrato infantil en particular, afirma que “tanto en los instrumentos internacionales como en las leyes y programas nacionales, prevalece la concepción de que la violencia familiar es una manifestación de abuso de poder que deriva de la desigualdad de género y de la situación de dependencia de los niños respecto de los adultos” (p. 13); afirmación que lleva a observar con mayor atención la vulnerabilidad de derechos a los que son sometidos estos dos actores de la sociedad y observar su espectro en tanto asunto público que se explica como patrón constante de conducta , al punto de lo normal desde el punto de vista estadístico.

Ahora bien, según esta misma autora, citando a Weis (1989) la violencia familiar abarca los actos cometidos por personas relacionadas por parentesco; también los cometidos entre parejas que tienen relaciones íntimas aunque no vivan bajo el mismo techo, así como entre quienes, por vivir bajo el mismo techo, tienen relaciones domésticas aunque no tengan relaciones de parentesco. El espectro se hace más amplio y, por tanto, vale tener en cuenta los tipos de violencia intrafamiliar con el fin de ampliar igualmente el panorama que nos implica.

Sin pretender desarrollar un análisis del lenguaje en torno al término violencia, si se considera necesario observar algunos aspectos que rodean su significado con el fin de especificar, posteriormente, aquellos elementos que competen al plano de lo jurídico.

Siguiendo a la misma autora en sus lecturas a Corsi (1999), se encuentra que el concepto de violencia remite al concepto de *“fuerza”*, el que a su vez corresponde a los verbos como *“violentar”*, *“violar”*, *“forzar”*. Haciendo relación de significados, parafraseando a Corsi (1999), Loanza (2005) encuentra que la conducta se percibe como violenta en la medida en que se presente un cierto desequilibrio del poder, el que puede ser definido culturalmente o por el contexto. A su vez, tal desequilibrio de poder no es necesariamente objetivable para un observador externo, sólo es perceptible en la relación interpersonal; sin embargo, se deja en claro que “el objetivo de la violencia es someter al otro mediante el uso de la fuerza” Azaloe (2005) citando a Corsi (1999).

Continuando con la concepción de violencia intrafamiliar de Azaloe (2005) tomada por Corsi (1999) es presentada la siguiente definición: “violencia familiar alude a todas las formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de una familia.” De donde la relación de abuso refiere a la interacción que enmarcada en el contexto de *desequilibrio de poder*, implica que una de las partes, por acción o por omisión, ocasiona daño físico o psicológico a otro miembro de la relación. Con lo que se tiene que por violencia familiar se comprenden “...las distintas formas de relación abusiva que caracterizan de modo permanente o cíclico al vínculo intrafamiliar” Azaloe (2005) citando a Corsi (1999).

Observando entonces la expresión de *desequilibrio de poder* como el contexto que enmarca la violencia, se tiende a comprender la especial atención que merecen tanto la infancia como la mujer, en tanto que estos dos actores de la sociedad son quienes mayormente padecen de abuso físico o mental, descuido o trato negligente en el caso de la infancia, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual en el marco de la familia.

1.2 Tipos de maltrato en contexto de violencia intrafamiliar

Con el fin de observar los tipos de maltrato de violencia intrafamiliar y bajo la indicación contextualizada por el *desequilibrio de poder*, es presentada una breve tipología desde los dos actores de la sociedad: la infancia y la mujer.

Por un lado, Según Azaloe (2005) citando a Ireland (2002) los especialistas distinguen cuatro tipos de maltrato infantil:

1. Maltrato físico

Si bien el castigo físico es una forma legal y culturalmente aceptada de ejercer disciplina parental sobre los hijos, y pese a que en varios países, entre los que se encuentran Australia, Croacia, Dinamarca, Italia, Noruega, es prohibido al castigo físico al infante, hay un indicador que hace que el castigo deje de serlo y pase a ser considerado maltrato: dejar heridas permanentes. Son los médicos quienes revisan las huellas de las marcas y deben ser explicadas por los padres o acudientes.

Aunque no resulta una literatura unánime en afirmar sobre los límites entre un castigo y un maltrato físico, sí se delega a la normatividad nacional que sea la que presente una clara connotación y explicita los límites del castigo que se constituyen en umbral de maltrato. Según Azaola (2005) se tiene como motivos de desacuerdo más notorios en materia de conceptualización de maltrato infantil, los siguientes:

- Si el maltrato físico se refiere sólo a los daños intencionales
- Si sólo deben incluirse los daños recientes
- Si se refiere sólo a los daños que nos son accidentales
- Si se trata sólo de actos que tengan un carácter cíclico, constante o recurrente o deben incluirse también actos aislados o excepcionales.
- Si se requiere la presencia de daños físicos visibles, huellas o daños demostrables

- Si se requiere que exista daños o si basta con que el niño o niña hubiera sido puesto en peligro de sufrirlos
- Si se debe establecer una distinción, y con qué criterios, entre el castigo corporal y el maltrato físico

2. *Maltrato psicológico*

Luego de presentar una serie de planteamientos que lindan entre lo filosófico y lo psicológico, pasando por aspectos pedagógicos, Azaloe (2005) presenta a manera de compendio conceptual la idea propuesta por Clark y Clark (2001) en la que afirma que:

El maltrato psicológico o emocional se define como actos u omisiones cometidos por padres o cuidadores que han provocado o pueden provocar trastornos de comportamiento, cognitivos, emocionales o mentales serios. El maltrato psicológico comprende tanto actos de abuso como de negligencia. La negligencia emocional incluye la falta de contención adecuada, retener afecto, permitir al niño adoptar comportamientos inadecuados y rehusar proveerle una aceptación o reconocimiento básicos. (p.14)

Si bien habrá casos que exigen acompañamiento clínico para lograr claridad en la identificación de cada caso, se considera que generalmente los padres de niños perturbados reconocen el problema y buscan ayuda para resolverlo. En cambio, padres que abusan psicológicamente de los niños, a menudo se muestran despreocupados y culpan a los niños del problema.

3. Abuso sexual

En documento del observatorio de la Policía Nacional de Colombia (2013) se cita la definición presentada por la Agencia Federal Norteamericana en los siguientes términos:

Compromete los contactos o interacciones entre un niño y un adulto, cuando el adulto (agresor) usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otra persona. El abuso sexual también puede ser cometido por una persona menor de 18 años, cuando ésta es significativamente mayor que el niño (víctima) o cuando (el agresor) está en una posición de poder o control sobre otro menor. (p. 37)

La Policía Nacional de Colombia presenta como aspecto a tener en cuenta, que ante la presencia de este fenómeno, es la edad del niño o niña la que influye a la hora de tomar la decisión de escapar del abuso, pues en la mayoría de los casos a menor edad se vuelve no comprensible lo que está sucediendo. De tal manera, que se constituye en una responsabilidad no solo civil sino también y con mayor razón, responsabilidad del Estado, proteger al menor contra este tipo de abuso.

4. Negligencia

Si bien la negligencia compromete acciones referidas al fracaso repetido a la hora de proporcionar al niño o niña las condiciones mínimas de alimentación, vestido, atención médica, educación, seguridad y satisfacción de necesidades tanto físicas como emocionales, esta tipo termina por ser el menos visible y del que menos se habla en la cotidianidad adulta.

La negligencia conlleva una tipología en la que el menor puede ser vulnerado de manera evidente:

- a. **Negligencia física:** abandono, falta de supervisión; no proporcionar cuidados en la salud; mantener al menor en condiciones de insalubridad severa ya sea en el hogar o referente a la higiene personal; nutrición y vestido inadecuados, permitir que el menor ingiera drogas o alcohol.
- b. **Negligencia emocional:** exponer al menor a violencia extrema entre los esposos; rechazo constante; negar afecto.
- c. **Negligencia educativa:** ausencia constante a la escuela; no matrícula académica.

La negligencia entonces, enmarca un amplio marco de acción responsable por parte de los padres o custodios del niño que igualmente, se encuentra amparado bajo las normas nacionales.

Por otro lado, se encuentra la mujer como el otro actor de la sociedad sobre el que recae el *desequilibrio de poder*.

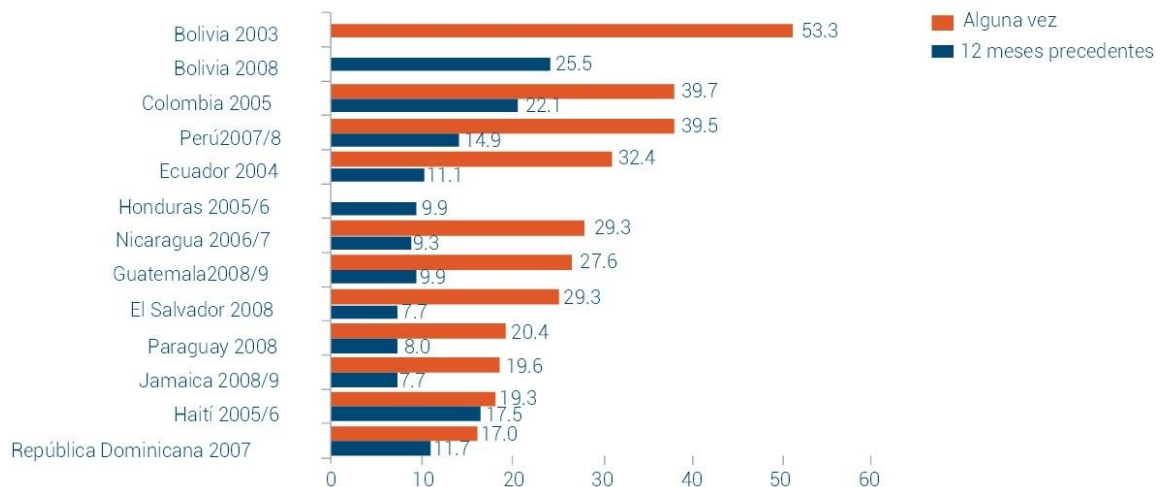
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INML y CF- en su proyecto Forensis Datos para la vida 2014, informa en su capítulo sobre comportamiento de la violencia de pareja que la violencia contra la mujer en la relación de pareja se ha convertido en un motivo de preocupación internacional. Considerada inicialmente como un tema sobre todo de derechos humanos, la violencia masculina en la pareja se ve cada vez más como un problema importante de salud pública. Igualmente, expresa que una de las dificultades para

la delimitación de la violencia contra la pareja está referida a los componentes nocionales sobre pareja y violencia.

Desde la obra Forensis (2014) se entiende por “pareja sentimental o íntima”:

[...] a la formada por dos personas, sean hombre o mujer mayores de edad o adolescentes, que tienen o hayan tenido relaciones íntimas consentidas entre sí a lo largo de un período mínimo de varias semanas, hayan convivido o no de forma continua en el mismo domicilio. Por tanto, esta definición incluye parejas de esposos y exesposos, de novios y exnovios y también parejas íntimas más esporádicas (p. 68).

En la misma obra se encuentran los datos estadísticos que demuestran que al hablar de violencia intrafamiliar a nivel latinoamericano en la relación de pareja, es la mujer la víctima más frecuente y el hombre el agresor habitual.



Fuente: Resumen del informe La violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe. Organización Panamericana de la salud y los Centros para Control y Prevención de enfermedades.

Parafraseando el documento Forensis (2014) del INML y CF, en los 12 países fueron realizadas encuestas en las que se indagaba a las mujeres si habían sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja alguna vez o durante los últimos 12 meses. Con el fin de

lograr resultados más específicos que indicaran el tipo de violencia, fueron especificados los siguientes modos o formas de violencia: ser abofeteada, pateada, y los actos sexuales, tales como las relaciones sexuales forzadas (este último fue indagado en todos los estudios). Obligó a realizar “actos sexuales” (Haití 2005/6, Perú 2007/8 y República Dominicana 2007), y las relaciones sexuales no deseadas realizadas por miedo a su pareja (El Salvador 2008, Guatemala 2008/9, Nicaragua 2006/7 y Paraguay 2008). Mediante la combinación de las respuestas de las mujeres a todas estas preguntas, este indicador incluye cualquier combinación de violencia física y/o sexual infligida por la pareja alguna vez o en los últimos 12 meses.

Por su parte, la violencia es definida como una estrategia de control y dominio de la pareja.

La agresión contra la mujer en relación de pareja refiere no sólo un sinónimo de agresión física sino todo un “patrón de conductas violentas, coercitivas incluye los actos de violencia física contra la pareja, el maltrato y abuso psicológico, las agresiones sexuales, el aislamiento y control social, el acoso sistemático y amenazante, la intimidación, la coacción, la humillación, la extorsión económica y las amenazas más diversas.” INML y CF (2014, p. 209).

Conforme lo anterior, se observa un fenómeno social, de salud pública que contiene una serie de comportamientos violentos, actitudes, sentimientos, prácticas, vivencias y estilos de relación entre miembros de una pareja (o expareja) íntima que no sólo refiere la agresión física, sino que además, produce daños, malestar y pérdidas personales graves a la víctima.

La mujer recibe en el tiempo y de manera crónica todo un ejercicio de sometimiento al poder que ejerce sobre ella su pareja a la vez que se ve sometida por miedo, inseguridad, sufrimiento, dolor, daño físico o psicológico a una constante de maltrato que multiplica su estado de indefensión.

Aunque resulte de poco creer y sin caer en juicios acelerados, las estadísticas que presenta el documento Forensis en 16 entregas a lo largo de 8 años, dejan ver la violencia contra la mujer como un fenómeno recurrente y repetitivo de difícil erradicación, observable en acciones constitutivas propias de la dinámica de pareja en las que se excusa un fuerte arraigo cultural y diríase, con cierta aceptación social; incluyendo aquellas acciones que pueden llegar a causar, incluso, incapacidad personal o la muerte.

La violencia contra la mujer no es un fenómeno exclusivo de países como Colombia:

Las estadísticas mundiales y regionales sobre la violencia de pareja son alarmantes, indican que no es un problema social exclusivo de países en vías de desarrollo. En el mundo, anualmente, 5,3 millones de mujeres son víctimas de esta violencia; en Estados Unidos, entre 850.000 y 1,5 millones de mujeres son violadas o físicamente atacadas por su pareja cada año. La prevalencia de agresión física por dicha persona es del 22% (7).

Según el estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra ella, entre el 15% y el 71% de las entrevistadas (24.000) habían sufrido violencia física o sexual, o ambas, por parte de su pareja a lo largo de la vida. Destaca además que el mayor número de experiencias violentas se presentaba en entornos provinciales, específicamente en población rural. Por otra parte, la OPS en su informe sobre violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe demostró que la violencia física o sexual contra la mujer infligida por el compañero íntimo está generalizada en toda Latinoamérica. INML y CF (2014, p. 209)

Sin ahondar con mayor detenimiento en las diferentes implicaciones conceptuales sobre los tipos de violencia intrafamiliar y en ella las que compete particularmente contra la infancia y la mujer por su condición de *desequilibrio de poder*, los que pasarían por factores de riesgo, análisis estadísticos de frecuencia, consecuencias tanto individuales como sociales, se considera que se ha logrado ampliar el espectro que compromete la visión jurídica que envuelve la violencia intrafamiliar.

1.3 Generalidades sobre contexto jurídico y violencia intrafamiliar

En el concierto mundial y especialmente en el latinoamericano se ha celebrado un pacto a través de tratados y convenios internacionales, consistente en la adopción de medios y mecanismos jurídicos para el enfrentamiento de la violencia contra la violencia intrafamiliar.

Henríquez (2014) citando a Faur (2008) afirma que los organismos protectores de los derechos humanos tomaron la iniciativa de designar al Estado y a la sociedad la obligación de prestar atención integral a la familia; a la vez que se indicó que las relaciones dentro de ella deben fundarse en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y el respeto entre todos sus integrantes, con lo que la familia pasa a ser un espacio de integración entre lo público y lo privado. El respeto a la intimidad al interior de la familia queda ahora limitado a la lógica de respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona.

Por otra parte, en la misma obra Henríquez (2014) cita a Baiz (2009) quien considera al respecto de la legislación sobre violencia intrafamiliar que:

...Aun cuando la violencia intrafamiliar no ha sido abordada como tal, los tratados, convenciones, acuerdos se refieren en su gran mayoría a la violencia contra la mujer y no a la violencia intrafamiliar, en este sentido resulta conveniente destacar que durante el transcurso de los últimos 50 años varios acuerdos internacionales han servido como el marco de referencia para trabajar a favor de la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer (p.60)

Teniendo en cuenta lo anterior, se exponen a continuación generalidades sobre el contexto jurídico colombiano pertinente en el campo de la protección a las víctimas de violencia intrafamiliar.

Colombia atendiendo al compromiso internacional de velar por los derechos de la familia, ha ratificado la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), a través de la Ley 51 de 1981 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), por medio de la Ley 248 de 1996; e igualmente brinda a las autoridades competentes la herramienta para la adopción de medidas de protección y atención de las víctimas de conformidad con la Ley 1257 de 2008.

Colombia, en materia legislativa, ha tenido avances significativos; sin embargo, en su aplicación y en la adopción de políticas coherentes tiene ciertas situaciones por salvar, pues lo más importante es superar las dificultades que representan la cultura y la costumbre, no sólo de la ciudadanía sino en sus propias instituciones.

Mediante la Ley 294 de 1996, se estableció la acción de protección contra la violencia intrafamiliar, con la cual la víctima podía intentar acción judicial ante el Juez de Familia para que se le otorgara una medida de protección y su posterior sanción en caso de incumplimiento. A la postre se presentó la inconformidad en los estrados judiciales porque este tipo de procesos atiborró la jurisdicción de familia, en donde, además, esta situación se suele ver como pleito menor, otra dificultad por superar.

A través de la Ley 575 de 2000, se cambia la competencia para el conocimiento de la acción y en cumplimiento de las atribuciones que confiere el artículo 116 constitucional se otorgan facultades jurisdiccionales a autoridades administrativas, como lo son las Comisarías de Familia, para que conozcan de ellas con una segunda instancia ante el Juez de Familia. Todo esto se reglamenta a través del Decreto 652 de 2001, el cual determina que, para los efectos de la apelación, la sanción y los demás procedimientos asimilables, se aplicará lo previsto en el Decreto 2591 de 1991, que reglamenta la Acción de Tutela.

Con la Ley 1257 de 2008, en lo relacionado con la violencia intrafamiliar, se elimina la competencia de los jueces de paz para conocer las situaciones de violencia; asimismo se amplía la gama de medidas de protección y se redefine el concepto de familia para la aplicación de la acción, temas sobre los cuales volveremos de manera puntual más adelante.

Esta digresión resulta pertinente para mostrar que la acción de protección es empleada cada vez más por las víctimas de la violencia y se ha constituido en alternativa por las medidas de amparo que se otorgan. Del mismo modo, se hace evidente que se incrementan las

demandas, en la medida en que se divulga entre la ciudadanía la existencia de este mecanismo jurídico.

No obstante, la acción de protección tiene dificultades en su operatividad por la necesidad de procedimientos más ágiles aún, menos confusos, más manejables por los aplicadores de la ley y por las personas usuarias. Asimismo, requiere de alcances que superen la respuesta interpartes² y que lleguen hasta lo institucional, esto es, a las entidades encargadas de brindar protección y atención a las víctimas.

Con la Ley 1257 de 2008 (art. 34), la novedad radica en ampliar el espectro para facilitar que también puedan demandar protección quienes hayan cohabitado, es decir, que puede haber demanda esté o no vigente la convivencia. Cabe anotar, que lo denominado en nuestro medio como violencia intrafamiliar se ajusta más a las características de la violencia doméstica, por hacer referencia al aspecto relacional por encima del parental, sin embargo ambos términos son entendidos como sinónimos, por ello se utilizan indistintamente, pese a las diferencias que entrañan.

Significa lo anterior que el término violencia intrafamiliar es aplicado en término de Gallego (2006), inapropiadamente porque el propósito jurídico de la normativa que regula la materia no es, en sí mismo, preservar las relaciones parentales sino las relaciones domésticas. De este modo se amplía la idea que se tiene de familia, diciendo que un medio

² Inter partes es una locución latina que significa "entre las partes", utilizada en derecho para referirse a la aplicabilidad de una norma, un acto o un contrato.

para la conformación de la familia, además de lo parental es lo relacional, valga decir, la intencionalidad de crear espacios de convivencia y cohabitación, con sentido de permanencia y pertenencia.

2. LEGISLACIÓN VIGENTE PARA AFRONTAR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Colombia cuenta en la actualidad con profusos instrumentos jurídicos internacionales que amplían y complementan los desarrollos normativos nacionales tendientes a garantizar los derechos, generalmente violados en situaciones de violencia intrafamiliar y violencia sexual de niños, niñas, adolescentes y de las mujeres, en sus distintas condiciones. Con el fin de aportar al análisis que nos ocupa, veremos a continuación tanto la normatividad internacional como la nacional colombiana que concentra su atención en atender los derechos de la familia y protegerlos contra la violencia intrafamiliar.

2.1 Los Derechos Humanos y los indicativos jurídicos internacionales contra la violencia intrafamiliar.

Siguiendo en la contextualización nocional que refiere el *desequilibrio de poder* La normatividad internacional ha consagrado la violencia contra las mujeres como violación a los Derechos Humanos. Los organismos internacionales, a nivel mundial e interamericano han identificado una serie de conductas violatorias de los Derechos Humanos de las mujeres. La Organización Mundial de la Salud, en su primer Informe sobre Violencia y

Salud (octubre de 2002) califica la violencia como un problema de salud pública; resalta que cada año más de 1.6 millones de personas pierden la vida de manera violenta. La Organización de Naciones Unidas reconoce que las mujeres viven cotidianamente bajo el riesgo de recibir agresiones físicas, psicológicas y sexuales, riesgo que no tienen paralelo con el que afrontan los varones. Según el Banco Mundial, la violencia es la causa de uno de cada cinco días de vida saludable perdidos por las mujeres en edad reproductiva.

La violencia es causa de problemas de salud, incapacidad y muerte entre las mujeres en edad reproductiva, tan grave como el cáncer, y más grave que los accidentes de tránsito y la malaria. La declaración sobre Eliminación de Violencia contra la Mujer, de la Asamblea General de Naciones Unidas (1993), hace énfasis en que la violencia contra las mujeres se presenta tanto en la familia como en el espacio público, a veces permitida o tolerada por el Estado. Así mismo, resalta su preocupación por la violencia que se ejerce contra mujeres de minorías, indígenas, refugiadas, mujeres indigentes, recluidas en instituciones o retenidas, mujeres con discapacidades, ancianas y mujeres en el conflicto armado.

A continuación son presentados algunos instrumentos internacionales que son tenidos en cuenta por la Ley colombiana para erradicar todas las formas de violencia contra la mujer y para construir y preservar la paz. Entre ellos se destacan:

- Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)³. La Convención tiene como objetivo eliminar efectivamente todas las formas de discriminación contra la mujer, obligando a los estados a reformar las leyes vigentes a tal fin. En su artículo 1, la CEDAW define la discriminación contra la mujer como: “Cualquier distinción, exclusión o restricción hecha en base al sexo que tenga el efecto o propósito de disminuir o nulificar el reconocimiento, goce y ejercicio por parte de las mujeres, independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera”. También establece un programa de acción para poner fin a la discriminación por razón de sexo: los Estados que ratifican el Convenio tienen la obligación de consagrar la igualdad de género en su legislación nacional, derogar todas las disposiciones discriminatorias en sus leyes, y promulgar nuevas disposiciones para proteger contra la discriminación contra la mujer. También deben establecer tribunales y las instituciones públicas para garantizar a las mujeres una protección eficaz contra la discriminación, y adoptar medidas para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer practicada por personas, organizaciones y empresas.

- Declaración y Plataforma de Acción de Beijing⁴. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer renovó el compromiso de la comunidad internacional con los objetivos de la

³ Aprobada mediante la ley 51 de 1981.

⁴ Adoptada en Beijing- China 1995.

igualdad entre los géneros, el desarrollo y la paz para todas las mujeres e hizo que el tema del adelanto de la mujer entrara en el siglo XXI.

- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención de Belem do Pará)⁵. Tiene el propósito de proteger los derechos humanos de las mujeres y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas, ya que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

Según la Convención de Belém do Pará, la violencia contra la mujer, “incluye la violencia física, sexual y psicológica:

- a. Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual.
- b. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.

⁵ Aprobada mediante la ley 248 de 1995.

c. Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra” (OEA, 2014, P.3).

- Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas⁶. Fue aprobada por unanimidad el 31 de octubre de 2000, abogando por la adopción de una perspectiva de género⁷ que incluye las necesidades especiales de las mujeres y las niñas durante la repatriación y reasentamiento, la rehabilitación, la reintegración y la reconstrucción post-conflicto. Es el primer documento formal y legal del Consejo de Seguridad que exige a las partes en conflicto que respeten los derechos de las mujeres y apoyen su participación en las negociaciones de paz y en la reconstrucción post-conflicto. La resolución fue iniciada por Netumbo Nandi-Ndaitwah, entonces Ministro de Asuntos de la Mujer en Namibia, cuando el país presidía el Consejo de Seguridad.

- Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional⁸. Define como “trata de personas” la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación.

⁶ Adoptada por el Consejo de Seguridad el 31 de octubre de 2000.

⁷ Hace referencia al tipo de relaciones que se establecen entre hombres y mujeres con base en las características, los roles, las oportunidades y las posibilidades que el grupo social asigna a cada uno de ellos.

⁸ Aprobado mediante la ley 800 de 2003.

El Protocolo señala que tal explotación incluye, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a esta, la servidumbre o la extracción de órganos⁹. Resulta importante que los gobiernos sean parte del Protocolo y hagan esfuerzos por aprobar leyes y políticas nacionales que contribuyan a combatir este flagelo de manera efectiva. Al mismo tiempo, es menester que los países del hemisferio trabajen de manera conjunta en la adopción de medidas que brinden protección a las víctimas del tráfico y hagan frente a esta problemática.

- Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer¹⁰. O por sus siglas en inglés, OP-CEDAW) es un tratado internacional que establece los mecanismos de denuncia e investigación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). El Protocolo fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999 y entró en vigor el 22 de diciembre de 2000. Para junio de 2012, el Protocolo tenía 79 Estados firmantes y 104 Estados parte. Los Estados parte en el Protocolo otorgan competencia al Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer para conocer denuncias de individuos o investigar "violaciones graves o sistemáticas" de la Convención, lo que ha dado lugar a una serie de decisiones en contra de los Estados miembros, en cuestiones tales como la violencia doméstica, el permiso parental

⁹ ACNUR, Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (<http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1305.pdf>)

¹⁰ Aprobado por la Ley 984 del 12 de agosto de 2005.

y la esterilización forzosa, así como una investigación sobre el asesinato sistemático de mujeres en la localidad mexicana de Ciudad Juárez, Chihuahua. En este sentido, el Estado colombiano ha asumido el deber de adecuar su legislación interna y de adoptar todas las medidas necesarias para que a los compromisos internacionales se les dé cumplimiento en el ámbito nacional.

Como se puede observar, el Estado colombiano ha ratificado instrumentos internacionales al tenerlos en cuenta para definir la Ley que ampara los derechos de las mujeres, de la infancia y en general de la familia y, con ello, erradicar las formas de violencia que atenta contra la paz desde el seno familiar.

2.2 La Constitución Política de Colombia, soporte jurídico contra la violencia intrafamiliar

Con la adopción de la Constitución Política de 1991, se generan las condiciones propicias para la expedición de una ley contra la violencia intrafamiliar, por el respeto a la igualdad de los derechos entre el hombre y la mujer, y por el respeto de los derechos de los niños.

La Constitución Nacional consagra los derechos fundamentales a la libertad y la igualdad, al establecer en el artículo 13:

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

Como ya se mencionó, en el artículo 42 de la Constitución Política se dispuso, en uno de sus acápites lo referente a la familia como núcleo fundamental de la sociedad; y en tal sentido, reconoce las diferentes formas de conformarse, ya sea por vínculos naturales o jurídicos, indicando ante todo, su conformación a partir de una decisión libre por parte de los contrayentes.

Igualmente, en este Artículo, se explicita la responsabilidad del Estado en garantizar la protección integral de la familia, dejando sin lugar a voluntades individuales, la determinación del patrimonio familiar, el que define como inalienable e inembargable; asimismo, declara la honra, dignidad e intimidad de la familia como valores inviolables.

Entre los acápites del Artículo 42 se indica que las relaciones familiares deben estar basadas en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre los integrantes de la familia. Por otro lado, manifiesta que la violencia en la familia se considera como destructiva de su armonía y unidad, por lo tanto, deberá ser sancionada cualquier forma de violencia que atente contra ella conforme a la Ley.

El artículo 43 de la Carta, por su parte, establece que tanto el hombre como la mujer tienen igualdad de derechos y oportunidades. E igualmente indica que la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación.

La consagración del principio de la igualdad, la condena a todas las formas de discriminación y la obligación de sancionar los abusos provee un marco suficientemente amplio para orientar las leyes, políticas y programas en relación con la detección, atención, prevención y sanción de todas las formas de violencia contra las mujeres, así como la erradicación de la impunidad.

Adicionalmente, la Constitución contempla otras disposiciones que complementan el marco protector de los derechos de las mujeres, consagrados en los Artículos 17, 40 y 44 en los que se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos; por otro lado, se afirma el derecho a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político, con el que se garantiza a la mujer su participación en los niveles decisorios de la Administración Pública; finalmente, expresa el compromiso con la protección a los niños contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.

Es decir, el Estado colombiano tiene la obligación de prevenir y sancionar la violencia doméstica, responsabilidad que debe hacer parte de las agendas y objetivos de la legislación a nivel nacional, pues ello lo impone su posición de garante de derechos y permite

evidenciar su compromiso de proteger el espacio que *por natura* se constituye en la fuente de garantía de la democracia:

La familia es el espacio natural para la construcción y el ejercicio de la democracia y los derechos humanos, y como institución social expresa los patrones culturales que se presentan en una colectividad, en un espacio y tiempo determinados, por lo que propender por la garantía de los derechos de cada uno de sus individuos, siempre y cuando esta unidad sea democrática (Maya, 2007, p.5).

Desde la Constitución política de Colombia, el Estado define entonces los alcances institucionales formales que permiten intervenir la familia en caso de abuso de poder dirigido a alguno de sus miembros, acotando la legislación internacional y ajustando sus disposiciones jurídicas al ámbito de la sociedad colombiana con lo que se definen los mecanismos jurídicos de protección de sus integrantes contra la violencia intrafamiliar.

2.3 Marco Legal colombiano

En términos de Ley, es de claridad informativa identificar aquellas leyes que desde los preceptos constitucionales están orientadas a proteger los derechos de la familia contra la violencia intrafamiliar, lo que implica igualmente, la observancia de aquellas que defienden los derechos de las mujeres y de la niñez. Dejando de entrada por sentado, la importancia que en conocimiento sobre los referentes constitucionales tienen las Leyes 599 de 2000 y 600 de 2000 que en su orden refieren el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal.

El conocimiento de la Ley en materia de defensa de los derechos de la familia contra la violencia intrafamiliar se constituye en una necesidad en materia de derecho si se desea lograr procesos de interpretación que se acerquen al objetivo por el cual fueron promulgadas por el Estado, es por ello que identificar el marco de la Ley hace parte del presente capítulo y son presentadas sin apelar a elementos de argumentación que pudieran distraer el fin por el cual son convocados.

Primero son presentadas las leyes que enmarcan la violencia intrafamiliar, luego, aquellas que enmarcan la violencia contra la mujer, a continuación aquellas que enmarcan la violencia contra la infancia y, finalmente, aquellas que comprometen a estos dos actores de la sociedad en defensa de sus derechos.

En cuanto al marco de violencia intrafamiliar se encuentra la Ley 294 de 1996, por la cual se dictan las normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Por su parte la Ley 497 de 1999, establece la jurisdicción de Jueces de Paz como mecanismo alternativo a la solución de conflictos, entre ellos la violencia intrafamiliar. En este mismo sentido se encuentra la Ley 575 de 2000 (modifica parcialmente la Ley 294 de 1996), con la que se traslada la competencia en materia de violencia intrafamiliar de los Jueces de Familia a los Comisarios de Familia y a falta de estos a los Inspectores de Policía; y otorga asistencia a las víctimas de maltrato, consagra delitos contra la armonía y la unidad familiar (maltrato físico, psíquico o sexual).

Si bien la Ley 640 de 2001 modifica las normas relativas a la conciliación, es citada en este compendio, toda vez que en el Capítulo VII se dedica a la conciliación extrajudicial en materia de familia. Asimismo cabe destacar la Ley 882 de 2004 por la cual se aumenta la pena para el delito de violencia intrafamiliar, dado el énfasis que el Estado define a este tipo de violencia y dejando en evidencia la importancia que tiene la familia para la consolidación de un Estado en paz; a lo que se suma la Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforma los Códigos Penal, de Procedimiento Penal y la ley 294 de 1996 por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.

Entre aquellas Leyes que enmarcan el tratamiento contra la violencia en la mujer se encuentra la Ley 248 de 1995, en la que se aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Igualmente, se encuentra la Ley 742 de 2002 por la que se aprueba el Estatuto de Roma (Corte Penal Internacional, 1998), e incluye delitos relacionados con violencia basada en el género.

Por su parte, las Leyes que enmarcan el tratamiento contra la violencia en los niños, se encuentra la Ley 765 de 2002 con la que se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía. Entre tanto, la Ley 800 de 2003, aprueba la “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional” y el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas,

especialmente Mujeres y Niños, que la complementa, adoptados por la Asamblea General de la ONU 15 de noviembre de 2000.

Finalmente, se cuenta con la Ley 985 de 2005, por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de víctimas de la misma, con la que se enmarca la defensa de los derechos de la familia contra la violencia intrafamiliar en el contexto de atención y protección a víctimas.

Actualmente en Colombia, la violencia sexual contra la mujer es un delito, tipificado en el código penal como acceso carnal violento (art. 205), acto sexual violento (art. 206) y acoso sexual¹¹ (211 A)¹². Cuando estos delitos se comenten en persona puesta en incapacidad de resistir, por ejemplo inconsciencia o trastorno mental-, o en menor de catorce años la ley contempla penas mayores (art. 207 a 210).

Esta normatividad se comentará más adelante. Como se puede apreciar, es en el campo jurídico donde parece concentrarse los logros más visibles en favor de las mujeres. Sin embargo, la realidad del país exige consagrar nuevos mecanismos y, tal vez, modificar algunas de las disposiciones existentes para continuar avanzando hacia la erradicación de la violencia.

¹¹ Cuando alguien, en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona. Tipificado como delito mediante la ley 1257 de 2008.

¹² Este delito es reconocido actualmente por el código penal, gracias a la adición normativa promovida por Art. 29 de la ley 1257 de 2008.

3. LA LEY Y SUS APERTURAS JURISPRUDENCIALES

Colombia, en materia legislativa, ha tenido avances significativos; sin embargo, en su aplicación y en la adopción de políticas coherentes presenta retos por salvar, los que incluyen aquellos referidos a la superación de arraigos culturales y de costumbres en el comportamiento de hombres y mujeres sobre el trato mutuo y el que dirigen hacia los niños en el seno de la familia, arraigos que no sólo comprenden a la ciudadanía sino también a sus propias instituciones.

Nos resulta claro afirmar que los derechos fundamentales son los derechos humanos elevados a rango constitucional y que están íntimamente ligados con la dignidad humana. Estos derechos gozan de preponderancia en cuanto a su protección y sin ellos, ni su garantía, el Estado Social de Derecho sobre el que se edifica nuestro Sistema no puede existir.

El amparo de esos derechos, conocido en nuestro país como la tutela de los derechos, tiene previstos procedimientos constitucionales a través de la acción de *habeas corpus*¹³, acción de cumplimiento¹⁴, acción de tutela¹⁵ y de la acción de protección de la violencia

¹³ El Hábeas Corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine.

¹⁴ Mediante ella toda persona a quien afecte el incumplimiento de una norma con fuerza de ley (leyes, decretos extraordinarios, decretos legislativos) o acto administrativo puede reclamar ante la autoridad judicial su cumplimiento.

¹⁵ Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de

intrafamiliar, entre otros. Estos procedimientos tienen como característica gozar de principios de preferencia, de sumariedad, de agilidad procesal, con términos perentorios y prevalece sobre otras acciones.

Pero bien, aquí se centra el análisis en el origen y naturaleza constitucionales de la acción y por ello nos remitimos a lo previsto por el artículo 89 de la Constitución Política, contemplado dentro del capítulo cuarto, intitulado “De la protección y aplicación de los derechos”, que establece: “Además de los consagrados en los artículos anteriores, la ley establecerá los demás recursos, las acciones, y los procedimientos necesarios para que puedan propugnar por la integridad del orden jurídico, y por la protección de los derechos individuales, de grupo o colectivos, frente a la acción u omisión de las autoridades públicas”.

La Constitución Política en sus principios fundantes y en el entramado sistemático de su normativa señala con mucha precisión la naturaleza del pacto social condensado en ella: la condición del Estado Social de Derecho y los fines esenciales del Estado, junto con una gama de derechos humanos fundamentales que se vulneran por el hecho de la violencia doméstica. Con ello se establece que el mecanismo de protección es una acción constitucional (arts. 5° y 42), conclusión que, además, encuentra respaldo por tener cabida dentro del capítulo de la Constitución a los mecanismos de protección constitucional, conforme a lo previsto en el artículo 89 del mismo ordenamiento.

sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

Adicionalmente, procede lo establecido en la Constitución Política en su artículo 93 para la aplicación de normas nacionales que en materia de violencia intrafamiliar corresponda. Estas normas se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales ratificados por Colombia sobre derechos humanos.

Obsérvese, pues, cómo todos los elementos jurídicos y hermenéuticos conducen a establecer que la acción de protección es asimilable, aunque autónoma, a la acción de tutela y la suple en los eventos de la violencia intrafamiliar, pues es aquella el camino establecido por la ley para intervenirla y para brindar protección ante la violación de derechos fundamentales.

¿Pero cuál es la garantía de que la acción de protección sea un mecanismo de protección constitucional? La respuesta no puede ser otra que su propósito de dar seguridad a la comunidad; su exigencia para que haya una labor efectiva, eficaz, pronta, cumplida, que no permita dilaciones, que contemple términos improrrogables, de obligatoria observancia y aplicación por las autoridades investidas de las facultades para su decisión, y con ello el cumplimiento de mandatos superiores.

3.1 La jurisprudencia en acción de protección

Al hablar de las acciones constitucionales debemos referirnos a la acción de tutela (art. 86) contemplada para la protección de derechos fundamentales individuales; pero también

debemos referirnos a la acción de protección de la violencia intrafamiliar (Ley 294 de 1996, art. 5o), ya establecida en nuestro medio, como un mecanismo idóneo y suficiente para brindar medidas que protejan efectivamente a las víctimas de la violencia doméstica.

Por su parte, la acción de protección está condensada en un procedimiento breve y sumario, regido esencialmente por la oralidad, equiparado a la acción de tutela, con una doble instancia atípica en donde las decisiones de un funcionario administrativo, investido con facultades jurisdiccionales, son revisadas por vía de apelación ante el Juez de Familia, quien se erige como superior funcional.

Los términos de la acción de protección son cortos, con una capacidad de reacción de la institucionalidad señalada por la ley, consistente en que es factible adoptar medidas de protección con mucha agilidad, pues dentro de las cuatro horas siguientes deberá adoptar alguna que amerite el grado de urgencia.

Erigido sobre estos principios de brevedad y oralidad, el desarrollo probatorio es amplio, pues no existe un régimen o tarifa especial en este aspecto, por lo cual le es aplicable el Código de Procedimiento Civil en lo relacionado con el tema.

La doble instancia se cumple en el efecto devolutivo, lo que da plena validez a las decisiones de la primera instancia que deben irse cumpliendo en el entretanto de la decisión del Juez de Familia quien puede confirmar, modificar o revocar la decisión.

La acción de protección no es por sí misma sancionatoria, pues su cometido es prevenir, hacer cesar y erradicar la violencia intrafamiliar. De ahí que las medidas que se tomen están encaminadas a superar la situación de agresión y de latencia de la misma, siguiendo un procedimiento previsto para tal fin y del que a continuación nos ocuparemos desde sus puntos relevantes:

- La finalidad de la acción de protección: la Ley 294 de 1996 señala el propósito de la acción de protección como el tratamiento de las diferentes modalidades de violencia para preservar la armonía y la unidad familiar, sin embargo, este interés legal ha sido severamente cuestionado, pues no se puede sacrificar la integridad o la vida de las víctimas de la violencia en aras de mantener una institución en la que ya se ha perennizado la vejación y la violencia. Este objetivo no riñe con el de brindar protección a las víctimas, pues corresponde al juzgador hacer un ejercicio de ponderación en donde se somete a estudio y valoración los derechos en tensión para concluir cuál prevalece, si los derechos de la familia a la unidad y la armonía familiar, a través de sus miembros, o los derechos vulnerados de los sujetos víctimas.

- La violencia intrafamiliar: la Ley 1257 de 2008, en su artículo 16, define la violencia intrafamiliar como la acción ejercida por un miembro del grupo familiar hacia otro miembro, encaminada a producir un daño físico, psíquico o a la integridad sexual, o que contenga amenaza, agravio, ofensa o cualquier otro medio de agresión, válida de la fuerza. Zárate (2009) agrega, que debe tener un fin como el de buscar, por parte del agresor, el reconocimiento, el acatamiento, la sumisión, el temor, el respeto, el amor, la autoridad, en

fin, el objetivo implícito o explícito de ejercer y/o mantener el poder que ostenta en su entorno doméstico (p.16).

Sin embargo, debe ser siempre una acción y debe tener una intencionalidad, el *ánimus nocendi*¹⁶ del que hablan los penalistas, es decir, la carga emocional del daño que se quiere causar. Sin esto, se quedaría en la simple negligencia, que no tiene la capacidad de inferir daño intencional, pues para que éste se consolide como resultado debe ser la consecuencia de la intención, no basta la actitud de abandono, se trata de una expresión que tiene que ser dolosa para referirnos en términos de la punibilidad, aunque se quede en el campo de la tentativa.

Las situaciones de negligencia y descuido que pueden aparejar consecuencias nefastas, principalmente para niños y niñas, tiene previstos procedimientos específicos para su intervención a través de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos de que trata el Código de la Infancia y la Adolescencia.

- Definición de familia para efectos de la acción: la Ley 294 de 1996 reafirma la definición constitucional de la familia, que se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la libre decisión de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

Para efectos de la Ley (art. 2º.) integran la familia:

¹⁶ Es todo acontecimiento que hacen nacer, transmitir, modificar o extinguir un derecho.

- Los cónyuges o compañeros permanentes;
- El padre y la madre de familia, aunque no convivan en el mismo lugar;
- Los ascendientes o los descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos;
- Todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica.

A su turno, el art. 34 de la Ley 1257 de 2008, como quedó explicado en párrafos precedentes, extiende la aplicabilidad de las medidas de protección "...a las personas que cohabiten o hayan cohabitado", lo que significa que se agrega un elemento más: que se haya cohabitado. Independientemente de si son padres comunes, el hecho de que hayan convivido legitima la posibilidad de promover las acciones de protección, así no tenga vigencia esa convivencia o cohabitación. Sin embargo, prontamente este aspecto debe ser objeto de reglamentación, en el sentido de definir que esa convivencia haya sido signada por el ánimo de permanencia y en el espacio relacional con la intención de integrar una familia, a fin de no perder el propósito de la acción.

- Autoridad competente y demanda: con la Ley 575 de 2000 la competencia de otorgar la medida de protección se le entrega a las Comisarías de Familia o, en su defecto, al Juez Municipal, Civil o Promiscuo y, en el caso de que la violencia intrafamiliar se suscite en las comunidades indígenas, será competente la respectiva autoridad indígena. Ante dicha autoridad, y dentro de los treinta días siguientes al acaecimiento de la violencia se presenta la demanda de protección directamente por la víctima, pues no se requiere apoderado judicial para ello.

La demanda se realiza sin más formalidades que la información necesaria sobre los hechos, la identificación de las partes y sus direcciones y en el mismo momento el funcionario debe advertir si existe alguna inconsistencia para que sea subsanada, luego no hay oportunidad para su inadmisión.

Zárate (2009) señala que la Ley 1257 de 2008 le quita la competencia de la mediación para que cese la violencia, maltrato o agresión, a los jueces de paz y a los conciliadores en equidad.

- Medidas de Protección: la Ley 1257 de 2008 (p.3) enlista de manera enunciativa catorce medidas posibles que no se agotan ahí, pues el Juzgador puede adoptar cualesquiera otras que considere conducentes y apropiadas para el caso sometido a su decisión (art. 17):

a) Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, cuando su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia;

b) Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima, cuando a juicio del funcionario dicha limitación resulte necesaria para prevenir que aquel perturbe, intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la víctima o con los menores, cuya custodia provisional le haya sido adjudicada;

- c) Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños, niñas y personas discapacitadas en situación de indefensión miembros del grupo familiar, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar;
- d) Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública o privada que ofrezca tales servicios, a costa del agresor.
- e) Si fuere necesario, se ordenará al agresor el pago de los gastos de orientación y asesoría jurídica, médica, psicológica y psíquica que requiera la víctima;
- f) Cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su repetición la autoridad competente ordenará una protección temporal especial de la víctima por parte de las autoridades de policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo si lo tuviere;
- g) Ordenar a la autoridad de policía, previa solicitud de la víctima el acompañamiento a esta para su reingreso al lugar de domicilio cuando ella se haya visto en la obligación de salir para proteger su seguridad;
- h) Decidir provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia de los hijos e hijas si los hubiere, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades, quienes podrán ratificar esta medida o modificarla;

- i) Suspender al agresor la tenencia, porte y uso de armas, en caso de que estas sean indispensables para el ejercicio de su profesión u oficio, la suspensión deberá ser motivada;
- j) Decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones alimentarias, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modificarla;
- k) Decidir provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modificarla;
- l) Prohibir, al agresor la realización de cualquier acto de enajenación o gravamen de bienes de su propiedad sujetos a registro, si tuviere sociedad conyugal o patrimonial vigente. Para este efecto, oficiará a las autoridades competentes. Esta medida será decretada por Autoridad Judicial;
- m) Ordenar al agresor la devolución inmediata de los objetos de uso personal, documentos de identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la víctima;
- n) Cualquiera otra medida necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.

Estas medidas van desde la amonestación al agresor hasta el desalojo del mismo de su propio hogar, cuando se constituye en una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquier miembro de la familia, deben ser prácticas, pertinentes y conducentes, pero por sobre todo, eficaces.

Estas medidas de protección pueden ser tomadas por la autoridad competente de manera provisoria dentro de las cuatro horas siguientes a la formulación de la demanda y las definitivas dentro de los diez días siguientes.

- Trámite del proceso: Recibida la demanda se admitirá y señalará fecha para que se lleve a cabo una audiencia en la que participarán las partes. La notificación al demandado se suministra de manera personal o por aviso fijado en la puerta de acceso del inmueble donde reside, que se surte a través del notificador, nunca por medio de la misma víctima. La ausencia del demandado a la audiencia hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión y se continúa el proceso sin su presencia. Ante la presencia de victimario se le escucha en descargos, garantizando así su derecho a la defensa, oportunidad que tiene para solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.

La etapa del trámite del proceso ofrece dos particularidades: la conciliación y la oportunidad de aplicar el principio de justicia restaurativa¹⁷.

¹⁷ Se entiende por resultado restaurativo, el acuerdo encaminado a atender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la reintegración de la víctima y del infractor en la comunidad en busca de la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad.

La primera particularidad es la de la conciliación, el avenimiento entre las partes, como medio legal para buscar las fórmulas de solución al conflicto. Con esto se pretende encontrar alternativas, porque no se trata de conciliar la violencia sino sus efectos, por ejemplo, el desalojo, las normas de una convivencia segura, una separación, la liquidación de sociedad conyugal, en fin, todas las decisiones que ofrezcan seguridades de no reiteración de la violencia y la protección de la víctima. Recordemos que la parte que requería la presencia obligatoria de la víctima a la audiencia fue declarada inexecutable, luego ésta es voluntaria, como lo es también el asistir a la conciliación.

Esta figura ha sido muy cuestionada en el país y en otras latitudes pues los juzgadores y, en general, las autoridades insisten en la alternativa de la reconciliación, interpretando así la conciliación, lo que hace que la víctima continúe en estado de riesgo perenne. Sin embargo, esos temores se deben superar ante la debida comprensión de la misión de la autoridad, que debe estar de lado de la justicia, la equidad y de la vocación protectora que la ley le otorga.

La opción de la conciliación es valiosa, siempre que la víctima cuente con las debidas seguridades que le permita tomar decisiones autónomas, libres de coacción y de toda presión que vicie su consentimiento, y, pese a que se llegue a acuerdo, el Comisario o el Juez nunca pierde la potestad de tomar las decisiones concernientes a las medidas de protección que fueren menester.

Es decir, no por la conciliación, la autoridad pierde la competencia y así lo expresará en su providencia.

La otra particularidad es la oportunidad de aplicar el principio de la justicia restaurativa¹⁸, en la que víctima y victimario, con la presencia de un facilitador, buscan por sí, frente a frente, los mecanismos de restauración del daño y prever a futuro la forma de su relación, a fin de preservarla de la violencia.

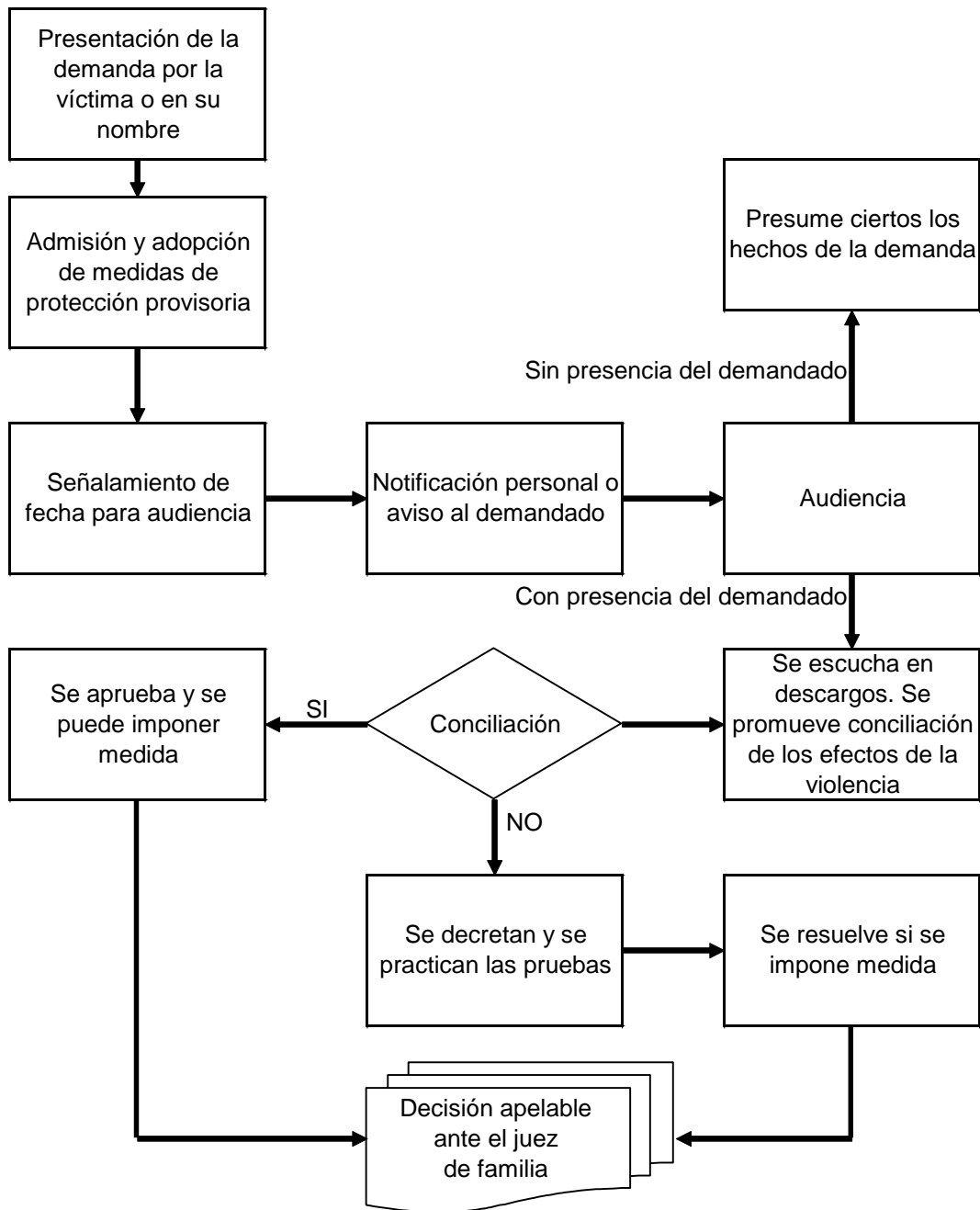
No son extraños los que convergen en el proceso, son seres humanos unidos por una historia común de vida. Por tanto, deben ser ellos quienes de manera consensuada exploren alternativas para la reparación del daño físico y sobre todo del daño moral, espiritual, que por regla general compromete a las demás personas que integran esa unidad doméstica o esa familia. Ésta debe ser la pretensión de esta oportunidad.

Según Villamil (1999), el proceso es una instancia que se convierte en un medio y “...todo lo que ocurra en el proceso, impone deberes adicionales a todos los actores, pues a la par de la eventual solución de un conflicto, hay subproductos, desprendimientos educativos forjadores de valores y artífices de la cohesión social” (p.33).

- Imposición de la medida: se decide el proceso con la resolución que impone medida de acuerdo a las necesidades, fallo que es apelable ante el Juez de Familia en el efecto devolutivo, lo que significa que no suspende los efectos del mismo. Para el ausente la decisión surte plenos efectos desde ese momento (ver figura 1).

¹⁸ Se entenderá por programa de justicia restaurativa todo proceso en el que la víctima y el imputado, acusado o sentenciado participan conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo, con o sin la participación de un facilitador.

Figura 1. Proceso de la medida de protección

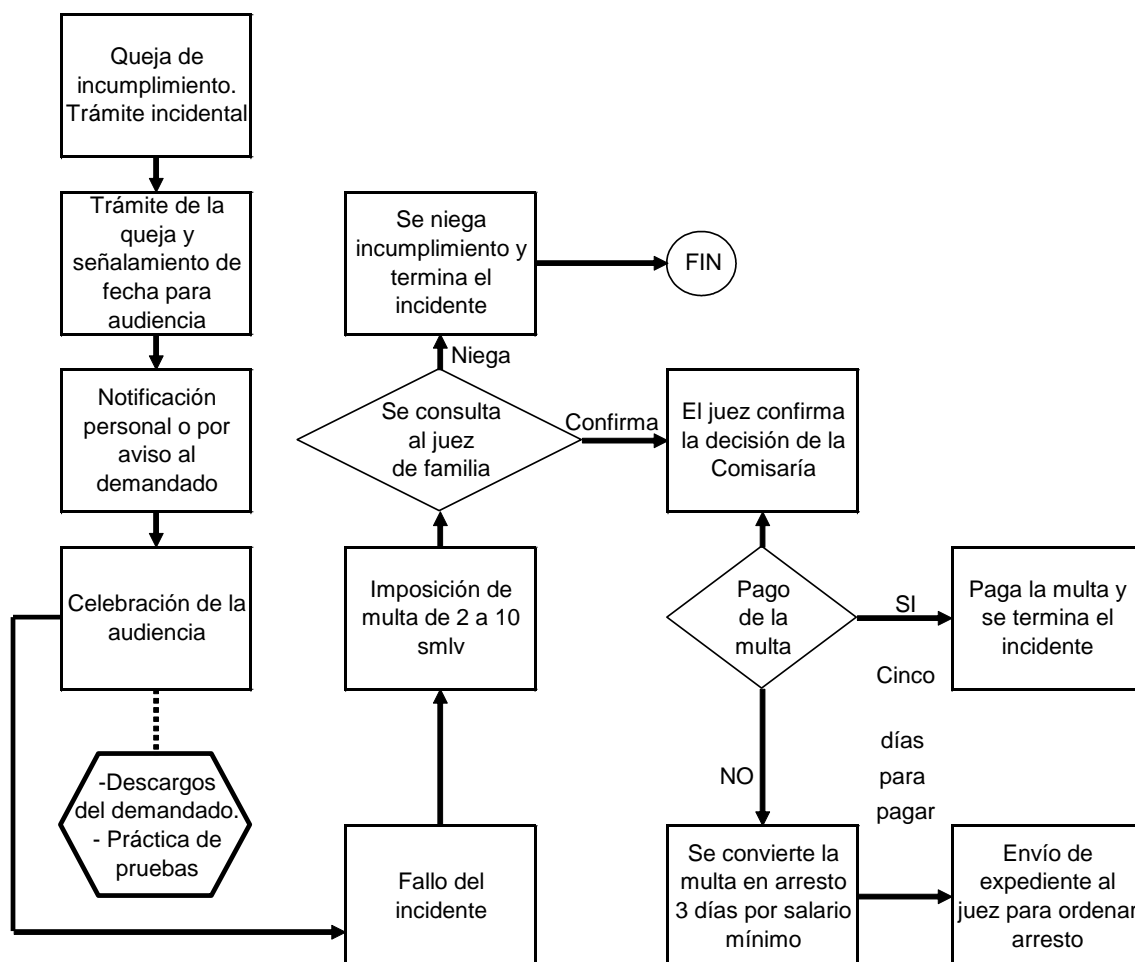


FUENTE: ZÁRATE CORTÉS, Henry. La acción de protección de la violencia intrafamiliar. En: Procurando la Equidad, No. 4 (jul. 2009); 21.

- Incidente de incumplimiento: el no acatamiento de la medida dará lugar a tramitar por vía incidental el incumplimiento, que corresponde al desacato en la tutela. Se aplican los mismos dispositivos normativos contenidos en el Decreto 2591 de 1991 y se notificará personalmente al demandado, se le concederá la oportunidad de su defensa, se decretarán y practicarán las pruebas y competará al comisario o juez, si se encontrare culpable al demandado, imponer multas que pueden oscilar entre los dos y los diez salarios mínimos mensuales, mediante resolución, que no es apelable pero que sí se debe consultar con el Juez de Familia; esta consulta tendrá el propósito de controlar su legalidad. En firme la imposición de la sanción, el demandado cuenta con cinco días para su pago en el tesoro municipal correspondiente y si no lo hiciere procederá la conversión en arresto, a razón de tres días por cada salario mínimo impuesto, lo cual significa que no puede pasar de treinta días. En caso de reincidencia dentro de los dos años siguientes, la sanción será de arresto directo entre 30 y 45 días.

Por cuanto la autoridad (Comisario de Familia) pese a estar investida de funciones jurisdiccionales, es de naturaleza administrativa, por ello no puede privar de la libertad a ningún ciudadano. En consecuencia deberá ser el Juez de Familia quien haga efectiva la conversión ordenando el arresto y emitiendo la orden de captura y el lugar en donde ésta debe cumplirse (ver figura 2).

Figura 2. Incidente de incumplimiento de la medida de protección



FUENTE: ZÁRATE CORTÉS, Henry. La acción de protección de la violencia intrafamiliar. En: Procurando la Equidad, No. 4 (jul. 2009); 22.

- Vigencia de la medida: la medida de protección asumida por el Comisario o Juez permanecerá vigente mientras persistan las circunstancias que dieron origen a ella y su terminación procederá a solicitud de las partes, del Ministerio Público o del Defensor de Familia, siempre que se haya demostrado plenamente que se han superado las razones que motivaron la medida. La Ley no fija término de vigencia de las medidas, por lo tanto, la

forma de terminación sólo la establece el artículo 18 de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 12 de la Ley 575 de 2000.

3.2 La violencia intrafamiliar en la jurisprudencia colombiana

En acciones de constitucionalidad en casos de violencia intrafamiliar, en cumplimiento de la Convención de Belém do Pará, se expidió la ley 294 de 1996, ley de Violencia Intrafamiliar, que fue examinada por la Corte en ejercicio del control de constitucionalidad¹⁹.

En su pronunciamiento, la Corporación sostuvo que la protección del Estado a las personas no puede quedar reducida al ámbito de lo público y debe extenderse al espacio privado, y que la violencia intrafamiliar puede considerarse un delito autónomo, ya que encuentra sustento constitucional en el artículo 42 de la Carta, según el cual “cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley”.

Además, se señaló que al propender por la eliminación de la violencia en la familia, la norma que consagra el delito de violencia intrafamiliar, busca la protección de los miembros más débiles de la población (menores, ancianos y mujeres). Asimismo, la Corte considera que erradicar la violencia intrafamiliar es de interés general “por ser la familia la

¹⁹ Acción pública de inconstitucionalidad formulada por Gloria Guzmán Duque contra los artículos 22 y 25 de la ley 294 de 1996. Ver sentencia C-285 de 1997.

institución básica y el núcleo fundamental de la sociedad, y un espacio básico para la consolidación de la paz”.

En el mismo fallo, la Corte se pronunció sobre el delito de violencia sexual entre cónyuges, compañeros permanentes, entre dos personas que tienen hijos comunes, o personas que cohabiten o hayan cohabitado. Al respecto, sostuvo que la libertad sexual de estas personas no puede considerarse disminuida por el vínculo que las une, y por tanto, la conducta del agresor debe ser considerada injusta cuando la violencia sexual se ejerce sobre su compañero o cónyuge, como cuando la víctima es una persona que no pertenece al ámbito familiar. Debe anotarse que pese a que la Corte considera reprochable social y jurídicamente el delito de violencia intrafamiliar, no considera más lesivo para la familia el delito de violencia sexual entre cónyuges, atenuando de esta forma su tendencia jurisprudencial hacia la necesidad de contar con mecanismos jurídicos sólidos para enfrentar la violencia en la familia.

Por otra parte, las acciones de tutela en casos de violencia intrafamiliar, con posterioridad a la ley 294 de 1996, la Corte no acoge más las tutelas en casos de violencia intrafamiliar, por existir un medio idóneo de defensa judicial que consiste en un procedimiento especial que permite a las víctimas de violencia intrafamiliar solicitar medidas de protección²⁰. El único caso en que la acción de tutela procede, es cuando se ejerce para proteger los derechos de

²⁰ Así por ejemplo, en la sentencia T-282 de 2002 la Corte revocó la protección “que en primera instancia se le había otorgado a la demandante, quien era sometida a maltrato y abuso sexual de su cónyuge, por haber un medio judicial idóneo para la atención de la violencia intrafamiliar, la ley 294 de 1996”.

niños/as o ancianos/as²¹, por tratarse de población vulnerable que requiere de la protección estatal²².

La Corporación también concede la tutela cuando a pesar de existir otro medio de defensa judicial, los medios judiciales existentes no han operado en debida forma, lo que hace inminente la protección por parte de la Corte a los derechos a la vida e integridad personal de las/los demandantes, que resultan amenazados²³.

La tendencia de la Corte a no conceder las tutelas por violencia intrafamiliar, se consolidó con la expedición de la ley 575 de 2000, que trasladó a las Comisarías de Familia la competencia para dictar medidas de protección. La Corporación considera que las leyes 294 y 575 contienen los mecanismos idóneos para proteger los derechos fundamentales en los casos de violencia intrafamiliar. Sin embargo, deja abierta la posibilidad de conceder la tutela cuando los instrumentos jurídicos contenidos en las leyes mencionadas no han funcionado adecuadamente.

3.2.1 La Corte Suprema de Justicia en ejercicio jurisprudencial

Esta Corte ha proferido varios pronunciamientos que han sido enfáticos en afrontar y superar retos en los que dirime conflictos de violencia intrafamiliar y en los que las

²¹ En el mismo sentido se falla la sentencia T-789 de 2001, para proteger a personas de tercera edad víctimas de violencia intrafamiliar.

²² COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-182 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano.

²³ COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-789 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

individualidades son examinadas y confrontadas con la Ley en procura de identificar las violaciones de las que ha sido objeto la víctima y así proteger sus derechos.

A continuación son presentados algunos casos de competencia e intervención de la Corte Suprema de Justicia con el fin de identificar acciones de jurisprudencia que amplían la mirada de aplicación de la justicia en términos generales.

a. Superación de estereotipos en investigaciones por delitos contra mujeres y la prohibición de alegar el consentimiento de víctimas menores de catorce años: esta Corte ha proferido varios pronunciamientos que han sido enfáticos en eliminar estereotipos sexistas que se manifiestan por parte de los sujetos procesales, los participantes en el proceso y los tribunales de instancia.

En sentencia del 26 de septiembre de 2000²⁴, la Corte Suprema llamó la atención al Tribunal de segunda instancia frente al argumento que empleó respecto de ausencia de pudor sexual en una menor y la consiguiente inexistencia de un bien jurídico susceptible de recibir lesión con la acción típica. La Corte consideró que este argumento resultaba inaceptable.

En efecto, el Tribunal de Montería, en una actitud abiertamente estereotipada y prejuiciosa señaló:

²⁴ COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia del 26 de septiembre de 2000, radicación No. 13.466. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

“La sala, teniendo en cuenta el contenido de lo declarado por la joven (...) ha llegado a la conclusión, sin riesgos en cuanto al acierto, que (...) en materia sexual no era una incapaz, pues basta detenerse en el detalle de los condones, en aquel de que faltaba en la habitación un televisor, en el del manejo del tiempo y hasta sobre el detalle de lo que se pagó, para hacer tal afirmación. Con lo dicho en precedencia, (...) Martínez no es esa colegiala inocente a quien se refirió el señor Agente del Ministerio Público. Es, por el contrario, una mujer entrenada, pues otra cosa no (sic) revela el desenvolvimiento que con gran naturalidad tuvo en el motel Hawai; y si por el examen anatómico (fls.17) no se puede probar la experiencia en cuanto al acceso carnal, es por aquello de que posee un himen complaciente (fls.94).

Estimar que en este caso, se ha violado la libertad sexual de una persona presumiendo su incapacidad mental para auto determinar (sic) un acceso carnal, es merecer la siguiente réplica de Humberto Barrera Domínguez: “... suponer que la persona, antes de cumplir esos catorce años de edad, no cuenta con la información sexual indispensable para prestar consentimiento válido, es presumir algo que la misma realidad contradice. En efecto, la misma prostituta menor de catorce años de edad, según aquel criterio de la presunción de la violencia, puede ser sujeto pasivo de ofensa a su libertad sexual y nadie puede asegurar esa falta de experiencia y de conocimientos sexuales”.

En cuanto al pudor sexual se ha dicho que es el recato o la vergüenza que debe rodear el acto sexual. Algunos autores lo presentan como un sentimiento de extrema delicadeza.

Teniendo en cuenta la forma como se desarrolló en el motel Hawai la joven (...), sin circunloquios de ninguna clase, se afirma que ahí no se dio un manejo delicado de la cuestión sexual (...). (p. 4, 7 y 8 del fallo).

La Corte Suprema encontró inaceptable este tipo de razonamiento frente a una niña de tan solo 13 años de edad, superando estereotipos sexistas por parte de los jueces de instancia.

Adicionalmente, esta Corte expuso los siguientes criterios:

- En los actos sexuales abusivos no se presume la violencia, sino que se presume la incapacidad del o la menor de 14 años para determinarse y actuar libremente en el ejercicio de la sexualidad. Las personas menores de esa edad no se encuentran en condiciones de asumir sin consecuencias para el desarrollo de su personalidad el acto sexual, debido al estadio de madurez que presentan sus esferas intelectual, volitiva y afectiva.
- La presunción es de carácter absoluto: absoluto: iuris et de iure²⁵, y no admite, por tanto, prueba en contrario. La ley ha determinado que hasta esa edad el menor debe estar libre de interferencias en materia sexual, y por eso prohíbe las relaciones de esa índole con ellos (...).

²⁵ Se denomina presunción, en Derecho, a una ficción jurídica a través de la cual se establece un mecanismo legal automático, que considera que un determinado hecho, o un determinado acontecimiento, se entiende probado simplemente por darse los presupuestos para ello. Una presunción iuris et de iure es aquella que se establece por ley y que no admite prueba en contrario, es decir, no permite probar que el hecho o situación que se presume es falso, a diferencia de las presunciones iuris tantum que permiten probar que son erróneas.

- El/la juez/a no puede discutir la presunción de incapacidad para decidir y actuar libremente en materia sexual, que la ley establece en pro de los y las menores de 14 años con el propósito de protegerlos/las en su sexualidad, pretextando idoneidad del sujeto para hacerlo, en razón a sus conocimientos o experiencias anteriores en materia sexual, ni apuntalar la ausencia de antijuridicidad de la conducta típica, al hecho de haber prestado su consentimiento.
- Mucho menos le es permitido desconocer la presunción que la norma establece, a partir de consideraciones de contenido supuestamente político criminal, con el fin de sostener que la edad que sirve de referente al legislador colombiano para suponer la inmadurez del o la menor, no se ajusta a lo que revelan la verdad social y cultural del país, y que la ley presume algo que la misma realidad contradice.

Dicho de otra manera, el sujeto activo de la conducta punible se aprovecha de la edad o el estado de inconsciencia de la víctima para desarrollar el delito. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia aclara que lo que se presume es la ausencia de capacidad de la víctima y no la culpabilidad del acusado. Así, “bien puede suceder que la conducta (...) no sea punible por ausencia de culpabilidad, como acontece, por ejemplo, cuando se demuestra que el sujeto agente actuó dentro del marco de un error invencible sobre la edad de la víctima (creyó razonablemente que la persona con la cual mantenía relaciones sexuales era mayor de 14 años) o sobre el límite de edad dentro de los cuales es permitido el libre ejercicio de la sexualidad (creyó que estaba fijada en 12 años y no en 14)”.

Posteriormente, en sentencia de casación del 7 de septiembre de 2005²⁶, la Corte dejó en claro que el himen elástico o dilatable de las mujeres y niñas no conduce a que no haya abuso o acceso carnal. La Corte Suprema en dicha sentencia acogió el dictamen médico en el cual se establecía que era impropio utilizar el concepto “himen intacto” en cualquier circunstancia, pues este término se refiere al himen que no ha sido tocado, lo cual, es imposible de establecer por examen clínico. Así, la Corte privilegió el testimonio de la menor abusada sobre las supuestas pruebas médicas realizadas sobre el himen.

b. La superación de estereotipos en los que se alega la personalidad de las víctimas:

Es común que los defensores de las personas sindicadas de haber cometido delitos que atentan contra la libertad, integridad y formación sexuales aleguen aspectos de la personalidad de las víctimas, especialmente de las mujeres, para opacar la seriedad y la importancia de la protección de los bienes jurídicos. No obstante, la Corte ha sido muy clara al afirmar que es inaceptable considerar que este tipo de delitos son de “poco daño social”. Al respecto, la Corte, en sentencia del 30 de marzo de 1995²⁷ afirmó que:

A los anteriores razonamientos opone el recurrente sus personales y subjetivas apreciaciones, más especulativas que jurídicas, desde todo punto de vista inaceptables, como aquella de que el acceso carnal violento es delito de poco daño social que no trasciende el ámbito de interrelación de las personas comprometidas (agresor y víctima),

²⁶ COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de Casación. 7 de septiembre de 2005. MP: Jorge Luis Quintero Milanés. Proceso No. 18455. Sala de Casación Penal.

²⁷ COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de Casación. 30 de marzo de 1995. MP: Nilson Pinilla Pinilla. Acta No. 046. Sala de Casación Penal.

dejando de lado el análisis y evaluación de las repercusiones de orden psíquico que un acto sexual no consentido produce en la persona ofendida, como bien lo anota la Procuraduría Delegada.

Por otro lado, en sentencia del 18 de septiembre de 1997²⁸, la Corte Suprema de Justicia manifestó que (i) la resistencia de la víctima no es un elemento típico de los delitos contra la libertad y el pudor sexuales y (ii) la personalidad o el “modus vivendi”²⁹ de la víctima nunca puede ser un argumento para presumir el consentimiento de la víctima a la agresión sexual. Respecto de esto último, la Corte afirmó con atinada razón que:

Dejando de lado las concretas razones de la prostitución (y aquí no se ha probado que Laura Cristina sea o haya sido prostituta), la Sala debe replicar a tal reproche que, es de elemental conocimiento jurídico, el argüido “*modus vivendi*” en nada incide, de suyo, en la libertad para disponer de la sexualidad. Es decir que por más prostituta que sea una persona su referida libertad debe ser respetada, so pena de que el Estado, a través de su aparato judicial, castigue ese irrespeto que él mismo (por conducto del legislador) ha elevado el rango del delito.

²⁸ COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de Casación. 18 de septiembre de 1997. MP: Dirimo Páez Velandia. Proceso No. 10672. Sala de Casación Penal.

²⁹ loc. lat. Modo especial de vivir.

Igualmente, en sentencia del 14 de abril de 2004³⁰, la Corte reprochó argumentos relacionados con la condición moral de la víctima y especialmente afirmaciones tales como que aquella era una joven mentirosas, manipuladoras, de escaso pudor sexual y habitual consumidora de bebidas embriagantes y sustancias estupefacientes. En dicha oportunidad, el censor intentó restar credibilidad al testimonio de la víctima con base en tales afirmaciones.

c. La violencia intrafamiliar es un problema de ámbito público, no privado: La Corte Suprema de Justicia al pronunciarse respecto del delito de violencia intrafamiliar, en algunas de sus sentencias, establece criterios para definir de manera más concreta la violencia intrafamiliar del hombre hacia la mujer

Es así como en la Sentencia T-529 de fecha septiembre 18 de 1992, la Corte manifestó “Se trata en este caso concreto de un conjunto de relaciones de carácter doméstico en que el marido colocándose en situación de superioridad física, abusa de su presencia en el hogar y despliega (sic) la potencia de su habilidad adquirida para someter cualquier resistencia de la mujer...”³¹. La situación de violencia intrafamiliar encierra la idea de vida digna. Es decir, que dentro de las obligaciones surgidas del vínculo afectivo, está la de respetar y brindar una vida digna al cónyuge o compañero/a. Se entiende entonces la vida, no solo como la

³⁰ COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de Casación. 14 de abril de 2004. MP: Jorge Aníbal Gómez Gallego. Proceso 21638. Sala de Casación Penal.

³¹ COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de Tutela. 24 de enero de 1995. MP: Dr. Carlos E. Mejía Escobar. Rad: No. 1399. Sala de Casación Penal.

conservación de los signos vitales, sino el derecho a la paz y la tranquilidad, es decir, como un “mínimo de bienestar interno”³².

Por otro lado, en sentencia de Tutela del 26 de septiembre de 1996³³, la Corte establece un listado explicando cuándo se viola el derecho a la integridad física y psicológica dentro del ámbito familiar, así:

Dentro de aquellos actos de violencia quedan comprendidos todas aquellas agresiones de tipo físico que restringen la libertad de las personas, como ocurre con el encerramiento en la residencia o el hogar familiar; a las que causan efectos sobre la integridad corporal, como acontece con los golpes y las lesiones corporales; y las que afectan los sentimientos, emociones y funcionalidad sexual, como sucede con los rechazos y forzamientos sexuales. Pero igualmente son actos de violencia proscritos en dicha protección las agresiones que afectan la integridad síquica, como sucede con los insultos y agresiones verbales; y las que la integridad moral de las personas con los tratamientos indignos de desprecio, rechazo, deshonra (por ejemplo. en su filiación materna o fidelidad sexual), descalificación (por ejemplo en materia de capacidad o actitudes) o proscripción indigna (por ejemplo, en lo moral, social, legal, etc.). Y también tienen dicho carácter los actos de violencia que restringen la libertad e impiden, obstruyen o afectan los derechos de la pareja femenina, como son aquellos que amenazan la vida y la salud de ella, los que de manera agresiva no

³² COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T – 028 del 31 de enero de 1994 y Sentencia T – 088 del 22 de febrero de 1994. Citadas en: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de Tutela. 3 de agosto de 1994. MP: Dr. Pedro Lafont Pianetta. Rad: No. 1456. Sala de Casación Civil

³³ COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de Tutela. 26 de septiembre de 1996. MP: Dr. Pedro Lafont Pianetta, Rad: No. 2586. Sala de Casación Civil y Agraria.

solo le suprimen su autonomía y la discriminan sino que con su sometimiento ocultan la servidumbre personal prohibida por la Carta Política; y, en fin, también son violentos todos aquellos actos que perturban la paz individual y familiar a que la mujer, como el hombre, también tiene derecho en la relación de pareja.

d. Los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales y los delitos contra la vida e integridad personal no se excluyen: Como ya se dijo en apartes anteriores, la Corte Suprema de Justicia ha considerado que, debido a que los bienes jurídicos que se protegen son los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales son distintos a los que se protegen con los delitos contra la vida y la integridad personal, resulta posible que concursen delitos que pertenecen a las dos categorías.

Es común, en especial, que se presente un concurso entre el delito de acceso carnal violento y el delito de lesiones personales.

En sentencia del 8 de mayo de 1996³⁴ (posición reiterada en sentencia del 31 de octubre de 1996³⁵), el recurrente en casación afirmó que el elemento de violencia es inherente al tipo penal de acceso carnal violento y que por esta razón su presencia es inevitable y que no por

³⁴ COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de Casación. 8 de mayo de 1996. MP: Fernando Arboleda Ripol Exp. 9401. Sala de Casación Penal.

³⁵ COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de Casación- Admisión. 31 de octubre de 1996. MP: Jorge Aníbal Gómez Gallego. Proceso No. 9282. Sala de Casación Penal: “Así las cosas, no es posible admitir, como lo plantea el censor, la existencia de un concurso aparente de tipos, porque más allá del número de inervaciones musculares del acusado, su comportamiento evidencia desde el punto de vista óptico varias acciones naturalísticamente diferentes, lesivas de distintos bienes jurídicos y ejecutadas cada una de ellas con finalidad propia. Lo que en verdad se presenta en este caso es una pluralidad de acciones que al ser negativamente desvaloradas por la antijuridicidad y la culpabilidad suponen el surgimiento de tres hechos punibles que concurren materialmente, como acertadamente lo dedujo el Tribunal acatando la preceptiva del artículo 26 del C. Penal.”

presentarse traumatismos en la víctima, la conducta del agente puede enmarcarse en otro hecho punible como el de lesiones personales.

La Corte al respecto afirmó que los criterios para determinar cuales actos lesivos de la salud física son integrantes de concurso con el hecho atentatorio de la libertad y el pudor sexuales, tienen que ver con diferenciar cuáles huellas son connaturales del acceso carnal violento (tales como el rompimiento del himen o los desgarros menores). Si los daños en la salud trascienden esos límites, serán elementos de un delito autónomo, la mayoría de las veces el de lesiones personales. Asimismo, la perturbación que puede dar lugar a delitos autónomos no es solo perturbación física sino también perturbaciones síquicas y alteraciones de la personalidad, de carácter permanente o transitorio, con compromiso en el desarrollo de una vida normal de relación.

3.3. Del análisis a la práctica

El grado de desarrollo institucional se relaciona con los procesos de formulación de políticas públicas, y entre sus características deseables se encuentran aspectos como su estabilidad ante cambios políticos, adaptabilidad a las condiciones económicas, representatividad, calidad de la implementación y aplicación efectiva, orientación al interés general y eficiencia. Pero ¿qué es una política pública? ¿Cómo la familia se incorpora a las políticas públicas y ¿Qué política pública para enfrentar la violencia intrafamiliar tiene el municipio de Santiago de Cali? Para resolver estas inquietudes se presenta a continuación

una conceptualización de las mismas, la cual permitirá enhebrar el sentido general de la presente monografía.

Kostka, (sf) citano a Jean-Claulde Thoenig en perspectiva de las Ciencias Sociales, presenta una definición de políticas públicas que la afirma como la disciplina que tiene por objeto de estudio la acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad. Tratando de dirimir la Ley de la que el gobernado el Estado, identificar los resultados que se esperan desde ella y administrar los medios que se requieren para su aplicación.

Para Galeano (2009) las áreas de análisis de las políticas públicas son: “el desarrollo social, la economía, la infraestructura y expansión de las vías generales de comunicación, de las telecomunicaciones, del desarrollo social, de la salud y de la seguridad pública, entre otras. Los planes de desarrollos anuales, quinquenales, etc. Los presupuestos anuales de los estados y las administraciones autonómicas y municipales. La administración pública o sistema burocrático y sus planificaciones. Los tratados internacionales y las declaraciones de principios de los estados individuales o unidos en agrupaciones regionales: Naciones Unidas, América Latina, Unión Europea, etc., con énfasis en la cohesión social y la gobernabilidad para desarrollos integrales o totales (p.2).

El concepto de política pública ha sido ampliamente debatido en las ciencias sociales. Las aportaciones desde diferentes perspectivas analíticas han sido cruciales para llegar a un tipo de acuerdo tácito sobre su significado. Así, Ruiz sugiere que:

.. Puede afirmarse que las políticas públicas surgen para dar respuesta a los conflictos sociales que se generan en el seno de las formaciones sociales. En este sentido, las políticas públicas constituyen los espacios de gestión y de solución de aquellos conflictos sociales que no pueden solventarse (ni total ni parcialmente) dentro de la esfera del mercado privado y de otras esferas sociales públicas. (p. 52).

Según Cocom (2014), las políticas públicas son “todo lo que las autoridades públicas deciden hacer o no hacer” (p.2). En el sentido de comprensión de las políticas públicas, refieren a materias concretas como sanidad, educación, medioambiente, pero cuando se toman medidas, se elaboran en forma de programas que engloban varias áreas o departamentos. Asimismo, una política pública supone un programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico; pero no se hace de forma aislada sino elaborando un plan que acoja varias disciplinas para su ejecución.

Ahora bien, en cuanto a la política pública en convivencia familiar para la familia caleña, esta enfatiza que no existe “La Familia”, como un modelo predefinido, sino Familias, por cuanto que coexisten variedades organizadas conformes con sus necesidades particulares y bajo las condiciones propias de su medio social.

En consecuencia, en términos del Concejo municipal de Cali (2014), una política pública no puede considerar la organización familiar como un espacio homogéneo.

La familia es esencialmente un escenario de la diversidad y la concertación; es un espacio de convergencia social y política. Una política pública debe plantear una nueva concepción de familia basada en la inclusión, el reconocimiento de los derechos individuales y el manejo democrático del poder (...). Para empezar con esta labor, se propone utilizar el término FAMILIA CLÁSICA para referirse a la idea de familia tradicional basada en la

racionalidad de la cultura patriarcal y reivindicar el término FAMILIA para hacer referencia a la idea de una familia democrática basada en relaciones incluyentes, respetuosa de los derechos y promotora del desarrollo individual y social (p.7).

Es a través de la intervención transdisciplinar que se permite reunir en un solo discurso (política pública) los puntos de vista de cada una de las ciencias para construir una estrategia de atención que facilite dar cuenta de la compleja problemática que encierra la violencia intrafamiliar.

En el modelo individuo, sociedad y Estado de la modernidad, es difícil establecer la relación entre la familia y las políticas públicas. En palabras de Puyana (2007), el tema exige la revisión de estos dos conceptos:

Para el primero, es pertinente reseñar los elementos que han motivado los cambios más significativos de la dinámica familiar, como son la revolución protagonizada por las mujeres para alcanzar el reconocimiento de su dignidad y la titularidad de sus derechos, el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como personas titulares activos de los derechos humanos y el ingreso de la tecnología electro-doméstica, de medios de comunicación y de la cultura consumista al hogar. Estas transformaciones de la vida social y política del siglo XX permiten afirmar que el desafío de la unidad familiar para el siglo XXI es consolidarse como grupo, en función de estas transformaciones fundamentales (p.52).

Desde el punto de vista de las políticas públicas, en palabras de Galvis (2006), el enfoque de los derechos humanos también invita a la reflexión en torno a su concepción en la democracia representativa y participativa. “La participación es un derecho fundamental que interpela a sus titulares a interactuar con el Estado y con su entorno, en su calidad de actores del desarrollo y a orientar la gestión pública con miras a la realización de los

intereses individuales y colectivos de la sociedad” (p. 23). Desde esta dimensión, la concepción del Estado y de las políticas públicas se modifica con el ingreso de nuevos actores como partícipes activos en los procesos de su elaboración y gestión.

Es a través de las políticas públicas que el Estado penetra de manera particular en la vida de las familias y en la formación de sus ciudadanos, promoviendo o reprimiendo la participación, ampliando o cercenando derechos, garantizando o no justicia. La forma específica en que el Estado se relaciona con la sociedad a través de sus políticas, construye representaciones acerca de la familia, el propio Estado y las formas de relacionarse entre géneros y etnias, sectores sociales, gobernantes y gobernados.

La visión tradicional de la familia ligada a la figura de la familia nuclear (padre, madre e hijos, con las funciones de proveedor económico depositado en el primero) persiste en los discursos y codificaciones de las políticas sociales, a pesar de los distintos cambios familiares existentes en la actualidad y de los significativos avances en su investigación.

Resulta importante destacar el hecho de tomar a la familia como una institución social universal que persiste inalterada a través del tiempo y las distintas culturas. La familia aparece así como fuente de virtudes o de todos los males.

Esta perspectiva de la familia tiende a vincularse a aquella que responsabiliza exclusivamente a las personas de la existencia de problemas como la pobreza, individualizando los orígenes de los problemas sociales. Desde este punto de vista, los

problemas sociales son tales en tanto hay individuos que no adecuan sus comportamientos a la media considerada válida socialmente, sin preguntarse por otras causas.

Además, aun con las falencias que puede presentar el observatorio de violencia intrafamiliar para garantizar su mayor confiabilidad y así contribuir de manera más válida a la interpretación de la problemática en la ciudad, encontramos insumos importantes para el diseño y focalización de las estrategias orientadas a contrarrestar este fenómeno.

La formulación de propuestas para enfrentar el maltrato intrafamiliar en Cali conduce a tres situaciones que son necesarias sortear, con el fin de lograr el objetivo de la política pública de orientar la acción y los recursos del Estado hacia la convivencia familiar basado en el buen trato, el respeto de los derechos humanos y la equidad de género. En primer lugar, es necesario el fortalecimiento económico de los programas que se adelantan en el marco de la aplicación de la política pública en convivencia familiar; en segundo lugar, la divulgación para la prevención, promoción, detección, vigilancia y atención de la violencia intrafamiliar a través de un equipo interdisciplinario; y finalmente, facilitar el acceso a los instrumentos jurídicos que permiten a las víctimas de la violencia intrafamiliar el restablecimiento de sus derechos y su atención integral.

- **Dotar de los recursos necesarios y suficientes a las instituciones que tienen funciones y competencias en violencia intrafamiliar.** En el diario el Tiempo del 16 de mayo de 2014 en su página 2 bajo el titular “Sin recursos para proteger a la mujer en Cali”, se hace pública la situación que enfrenta la capital del Valle con referencia a la política

pública para la mujer, en la que se afirma que no se cuenta con los recursos necesarios para aplicarla. Además, informa sobre la falta de insumos y de logística que presentan las comisarías de familia, a lo que se suma que en los hogares de paso se cuenta con recursos apenas para tres meses y el sector salud no cuenta con protocolos para atender a la mujer violentada.

Aunque el financiamiento de la política pública en convivencia familiar está asegurado con los aportes de las dependencias competentes de la administración municipal y el apoyo internacional de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), es evidente que se deben buscar recursos nacionales, responsabilidad que debe, según el Concejo de Cali (20014) “asumirla directamente el gobierno caleño a través de la dirección de Hacienda y no dejarlo solo en manos de las mujeres Concejales como ha ocurrido en años anteriores, porque quien tiene el análisis es el gobierno local” (p.2).

- **Divulgar entre la comunidad las instituciones competentes y los servicios que prestan.** Contrarrestar el desconocimiento tanto de las instituciones mismas como de la comunidad del marco jurídico para el manejo de la problemática de la violencia intrafamiliar como de la operatividad de las instituciones en lo relacionado a sus competencias, procesos y procedimientos, es un deber de todos. Aunque las instituciones cumplen con su responsabilidad en el reporte de casos de violencia intrafamiliar, como se pudo apreciar en el reporte del año 2012 de la Secretaría de Salud Municipal, no es constante ni de manera adecuada, o incluso se desconocen las competencias a las que deben

dar respuesta a la población, por esto es importante que se dé un mayor cumplimiento de los parámetros que deben realizar las instituciones frente a las competencias y reporte de casos.

Según Ortiz (2007), hace siete años un estudio sobre la medición de la violencia intrafamiliar concluía que, aunque en Cali existe un compromiso de las instituciones de salud, específicamente del área pública, de las comisarías de familia y de los centros zonales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- para el reporte de los casos, la generación de nuevos sistemas de información requiere ser analizada teniendo en cuenta que el querer potenciar el conocimiento de la problemática podría también incidir en el subregistro de casos debido a la limitada integración entre las diferentes instancias.

Siete años después, la situación es la misma, no hay integración que permita la consolidación de la información de violencia intrafamiliar por no contar exactamente con las cifras de casos en los sectores y en las instituciones afines con la problemática, y al no exigirle como hecho de obligatorio cumplimiento un reporte constante a los funcionarios sobre la denuncia de casos de violencia intrafamiliar.

La intervención del Estado en la problemática intrafamiliar, para nuestro caso la violencia intrafamiliar en Cali, es relativamente nueva y corresponde a una ampliación del concepto de los derechos humanos que es importante conocer. Además, se otorgan diferentes competencias a diferentes autoridades y es imperativo evitar el envío del usuario de un lado a otro sin que reciba atención.

Es importante vincular el escenario escolar de manera permanente y constante a la promoción del buen trato y el reconocimiento de los derechos humanos al interior de la familia. Al igual que programas de sensibilización permanentes en espacios de encuentro de la comunidad frente a la violencia intrafamiliar y la importancia de denunciar estas situaciones, para que se rompa la errada ideología que plantea violencia intrafamiliar como un problema privado, doméstico e irrelevante.

Capacitación a líderes, docentes y padres de familia en rutas de atención y mecanismos de denuncia para que se difunda el marco legal en lo relacionado a la problemática de violencia intrafamiliar.

- **Facilitar el acceso a los instrumentos que han sido creados para intervenir sobre la problemática.** En un mundo en que cada día es más fácil comunicarse, y en medio del boom de las tecnologías de la información y la comunicación que promueve el Estado, no se concibe cómo se sigue dependiendo de una organización inamovible para atender a las víctimas de la violencia intrafamiliar, a no ser por dos comisarías de familia que se programan mensualmente para atender a la población de los 15 corregimientos del municipio. La informática debería utilizarse para facilitar la denuncia de la violencia intrafamiliar.

Ahora bien, en cuanto a las redes sociales que se utilizan masivamente, especialmente por los jóvenes, es evidente la falta de direccionamiento ágil y sencillo de los distintos recursos

existentes para las mujeres víctimas de maltrato intrafamiliar, tal como se evidenció al tratar de acceder al canal YouTube o el portal flickr donde supuestamente están los videos y fotos que hacen parte de la campañas de no violencia contra la mujer caleña.

Capacitación de funcionarios en atención, detección y sanción de violencia intrafamiliar y promoción de la denuncia en donde los servidores responsables identifican, orientan, remiten y acompañan a las personas víctimas de violencia intrafamiliar ante las autoridades competentes logrando excluir el temor a la doble victimización y la desconfianza en el sistema y las instituciones que deben ayudarles. Además, la visibilización y posicionamiento de la problemática a través de una estrategia de comunicaciones dirigida a promover una transformación cultural que privilegie el respeto por los derechos humanos y en donde se dimensionen nuevas maneras de relacionarse, con un principio fundamental de respeto por el otro y sus diferencias para construir una sociedad democrática más justa, solidaria, incluyente y en paz, que posicione la violencia intrafamiliar como un intolerable.

4. CONCLUSIONES

La familia es la institución básica de la sociedad y como tal está amparada por el Estado. No hay un solo tipo de familia, debido a que se puede generar por diferentes tipos de vínculos, algunos por consanguinidad, otros por la vía del matrimonio, otros por convivencia o por parentesco lejano. Este concepto ha sufrido una gran transformación en los últimos años, para incluir relaciones por fuera del clásico núcleo, que también son consideradas familia.

En materia de políticas hacia las familias, no solamente es importante contemplar las distintas combinaciones que se articulan tras las nociones de familia y hogar, sino también las particularidades de los individuos que componen la organización familiar. En el primer caso, se trata del reconocimiento de distintos arreglos familiares y domésticos, tales como las familias ensambladas, las unidades domésticas organizadas con fines distintos a los de la procreación, entre personas del mismo sexo, de no parientes convivientes por razones económicas, etc. Desde el punto de vista de las políticas públicas y el ejercicio de los derechos, el tema debería plantearse más en el sentido de la formalización de los beneficios o la protección de arreglos familiares diversos, resultado de esas nuevas relaciones entre individuos. En el segundo caso, se hace referencia a los miembros de la familia en particular: hombres, mujeres, niños/as, jóvenes y adultos mayores, como en las políticas que cubren a los ancianos de ambos sexos, los programas de empleo para los jóvenes y las guarderías y jardines infantiles.

Para que la perspectiva de derechos oriente las acciones de políticas, debe existir un andamiaje jurídico-administrativo del Estado que garantice los derechos constitucionales y aquellos que, proviniendo de las demandas de grupos específicos, pasan a formar parte del conjunto de legislaciones estatales. En este sentido, las políticas públicas constituyen uno de los medios primordiales del Estado para articular normatividad y realidad, y de esta manera efectivizar la ciudadanía.

La violencia intrafamiliar corresponde al abuso que ejercen unos miembros de la familia sobre otros. Esta violencia puede ser física, sexual o psicológica, y causa muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico. En otros casos, la violencia es menos grave, aunque persisten los malos tratos, incluye por ejemplo, gritos, insultos, golpes que no dejan secuelas, o una negligencia leve de las necesidades físicas o psicológicas de las personas dependientes. En todos los casos la violencia en la familia es una violación de los derechos humanos de las personas, lo que justifica la intervención estatal. Se vulneran los derechos a la vida, la integridad física, la libertad, la autodeterminación, así como los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.

Para el sentido común, la violencia no debería tener cabida en la familia, pues esta palabra suele ser evocada en el discurso corriente cuando se quiere dar a entender que se ha conformado un grupo donde reina el entendimiento y la solidaridad.

La violencia en la familia trae consecuencias desestructurantes para sus vínculos y, por ende, en la subjetividad de quienes la padecen. En la familia suele encontrarse la violencia

impuesta por la vía de imperativos caprichosos de quien ostenta el poder y la violencia física que arrasa el cuerpo para generar sometimiento por temor. Hay violencia cuando se produce la violación de algún límite, allí donde no se respeta algún derecho establecido, cuando se irrumpe por la fuerza en algún espacio privado, por ejemplo, el cuerpo, o cuando se niegan o se borran las diferencias.

La violencia intrafamiliar es un grave problema de salud pública. A nivel individual trae graves consecuencias tanto para las víctimas como para los niños que aun sin ser víctimas directas, la presencian. Estos trastornos pueden ir desde muerte, heridas, enfermedades e incapacidades físicas hasta trastornos psicológicos. Sin mencionar el costo que representa para la sociedad, en términos de días laborales y escolares perdidos, y de recursos humanos desperdiciados.

La violencia intrafamiliar es una de las manifestaciones más frecuentes e incluso cotidianas de la violencia, por lo cual aún el problema pertenece al orden de lo privado, desde donde debe salir para convertirse en un problema de agenda pública dada su magnitud, su capacidad de reproducción y su relación con otras formas de violencia.

Por todas esas razones la familia recibe los efectos de todas las políticas de Estado tanto en el orden económico y político, como desde el punto de vista de la cultura y de la educación. Para comprender la importancia de una estrategia integral sobre familia es preciso mirar los obstáculos y las posibilidades que ofrecen las políticas de Estado. Cuando una institución tan importante como la familia permanece detrás del telón de la escena política del Estado,

no es posible percibir de qué manera las políticas producen efectos que alteran la vida familiar.

En el ámbito del gobierno nacional y municipal se requieren planes y programas de desarrollo socioeconómico capaces de evitar la fragmentación y exclusión sociales, males creados por la globalización y el mito del neoliberalismo que debe romperse. En este orden de ideas, ha quedado claro que muchas mujeres permanecen junto a su agresor por motivos sociales, económicos y psicológicos. Entonces, los problemas para un correcto registro de las cifras de maltrato y violencia sexual, como ya se dijo, son comunes, pues, cada uno de los entes estatales, manejan sus cifras de acuerdo a su función. Esta información desagregada permite el ocultamiento de hechos y situaciones que deben llamar la atención nacional.

Durante el año 2012 las comunas donde más se denunció la violencia intrafamiliar fueron la 13, 14 y 18, a pesar de esos datos todavía estamos muy distantes en establecer de forma contundente sectores de la ciudad donde se presenta con mayor frecuencia la violencia intrafamiliar y que permita focalizar las intervenciones, los datos parecen evidenciar más el establecimiento de una cultura de la denuncia como una forma de buscar la atención o la sanción frente al hecho violento. Es evidente que la violencia intrafamiliar se mimetiza y se oculta socialmente, especialmente cuando la víctima depende económicamente del agresor. Frente a estos hechos la prevención, promoción, detección, vigilancia y atención integral se convierte en los niveles de la política pública que requiere, además, de un apoyo económico, la divulgación de sus componentes a toda la ciudadanía y facilitarle el acceso a

las herramientas jurídicas que permiten afrontar la problemática de violencia intrafamiliar en el municipio.

Finalmente, las campañas de prevención de la violencia intrafamiliar no deben estar focalizadas únicamente en los estratos socioeconómicos bajos, porque la problemática no es un problema únicamente de las familias donde se ha detectado violencia intrafamiliar; el problema de la violencia intrafamiliar es un problema social y el hecho que pensemos que los programas de atención son para los sectores populares, para los sectores más pobres o deprimidos, eso de entrada ya tiene un sesgo, y un sesgo que tienen una limitación precisamente en la concepción de la intervención. Creer que en los estratos socioeconómicos no se presenta la violencia intrafamiliar es una trampa ideológica de la concepción de la violencia intrafamiliar.

BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ, R. y NARANJO, C. (2008). Violencia contra las mujeres: Historias no contadas. En: Reflexión Política. Vol.10. Bucaramanga: Universidad Autónoma de Bucaramanga. Instituto de Estudios Políticos.

ARRIAGADA, I. (2007). Familias y políticas públicas en América Latina: una historia de desencuentros. Santiago de Chile: Comisión económica para América latina y el Caribe.

BUITRAGO, Á. M. (2007). La defensa de las mujeres en la justicia. Bogotá: Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.

COLOMBIA. Código Civil. Bogotá: Editorial Leyer, 2013.

COLOMBIA. Constitución Política de Colombia. Bogotá: Editorial Leyer, 2013.

COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. (29, junio, 1999). Decreto 1127.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-182 de 1999, [MP Martha Victoria Sáchica de Moncaleano]

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia T-789 de 2001, [MP Marco Gerardo Monroy Cabra.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de Tutela. 24 de enero de 1995. [MP Dr. Carlos E. Mejía Escobar].

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de Casación. 30 de marzo de 1995. [MP Nilson Pinilla Pinilla. Acta No. 046. Sala de Casación Penal].

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de Casación. 8 de mayo de 1996. [MP Fernando Arboleda]

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de Tutela. 26 de septiembre de 1996. [MP Dr. Pedro Lafont Pianetta].

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de Casación. 18 de septiembre de 1997. [MP: Dirimo Páez Velandia].

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia del 26 de septiembre de 2000. [MP Fernando Arboleda Ripoll]

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de Casación. 14 de abril de 2004. [MP Jorge Aníbal Gómez Gallego. Proceso 21638. Sala de Casación Penal].

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de Casación. 7 de septiembre de 2005. [MP Jorge Luis Quintero Milanés].

EROLE, C. (2008) Familia, democracia y vida cotidiana: la(s) familia(s) en la gestación de movimientos sociales. Buenos Aires: Espacio Editorial.

FRANCO PATIÑO, S. M. (2008) Las familias: ¿Un asunto de políticas públicas? En: Sociedad y economía, No. 14.

FUNDACIÓN MUJER, ARTE Y VIDA. (2009) Las mujeres tenemos memoria: Todas las voces contra las violencias: Cien afiches en las luchas de las mujeres. Bogotá: Fundación Mujer, Arte y Vida.

GALLEGO MONTES, G. (2002). La familia en la construcción de lo público: un reto desde la modernidad. Manizales: Universidad de Caldas.

GALLEGO URIBE, S. (2006). Comunicación familiar: un mundo de construcciones simbólicas y relacionales. Manizales: Editorial Universidad de Caldas.

GALVIS ORTIZ, L. (2006). Pensar la familia de hoy. Bogotá: Ediciones Aurora.

GALVIS, M. C. (2009). Situación en Colombia de la violencia sexual contra las mujeres. Bogotá: Corporación Humanas: Centro Regional de los Derechos Humanos y Justicia de Género.

GÓMEZ, L. C. y CIENFUEGOS, L. (2011). Violencias contra las mujeres en Bogotá: Espacios y formas de expresión. En: DALMAZZO, Marisol. Violencias basadas en género y ciudadanía de las mujeres: Abordajes sobre las violencias hacia las mujeres en Bogotá. Bogotá: ARFO.

GONZÁLEZ, M. I. (2007). El cuidado de los vínculos: mediación familiar y comunitaria. Bogotá: Universidad del Rosario.

Herrera, J. (2001). Violencia intrafamiliar. Santa Fe de Bogotá: Leyer.

JELIN, E. (2010). Pan y efectos. La transformación de las familias. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica.

KING, E. M. y MASON, A. D. (2004). Hacia la integración de géneros en el desarrollo económico: mediante la igualdad de derechos, recursos y voz. Bogotá: Alfaomega Grupo Editor.

MAYA VILLAZÓN, E. J. (2007). Procurador General de la Nación. Citado en: Guía para la identificación, atención y prevención de la violencia intrafamiliar. Bogotá: Personería de Bogotá.

MEERTENS, D. et al. (2009). Colombia: brechas, diversidad e iniciativas. Mujeres e igualdad de género en un país en conflicto. Bogotá: Editorial El Malpensante.

PALACIO VALENCIA, M. C. (2004). Familia y violencia familiar: de la invisibilización al compromiso político. Un asunto de reflexión sociológica. Manizales. Universidad de Caldas.

POYATOS GARCÍA, A. (2003). Mediación familiar y social de diferentes contextos. Valencia, España: Universidad de Valencia.

PUYANA VILLAMIZAR, Y. y RAMÍREZ RODRÍGUEZ, M. H. (2007). Familias, cambios y estrategias. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

ROJAS GÓMEZ, M. E. (2010). La protección constitucional a la familia y sus miembros. Bogotá: Universidad de los Andes.

ROTH DEUBEL, A. N. (2006). Discurso sin Compromiso. La Política Pública de Derechos Humanos en Colombia. Bogotá: Ediciones Aurora.

RUIZ VIÑALS, C. (2004). Políticas sociolaborales: un enfoque pluridisciplinar. Barcelona: Editorial UOC.

VELÁSQUEZ GAVILANES, R. (2003). Bogotá: políticas públicas de gobierno local. Bogotá: Universidad Javeriana.

VILLAMIL PORTILLA, E. (1999). Protección Familiar – Visión Constitucional. Bogotá D.C.: Ediciones doctrina y Ley Ltda.

ZÁRATE CORTÉS, H. Procurando la Equidad, 4, p. 16.

CIBERGRAFÍA

COCOM AZUL, J. D. 2014) Políticas Públicas. S.l. Recuperada de: <http://chengre.blogspot.com/2011/03/politicas-publicas.html>

DE COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. (16 de julio de 1996). Ley 294 de 1994. Recuperado de: <http://www.col.ops-oms.org/juventudes/Situacion/LEGISLACION/FAMILIA/FL29496.htm>

ALCALDIA DE BOGOTA (11 de febrero de 2000). Ley 575 de 2000. Recuperado de: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5372>

ALCALDIA DE BOGOTA (4 de diciembre de 2008). Ley 1257 de 2008. Recuperado de: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34054>

COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. Protocolo de Vigilancia en Salud Pública violencia contra la mujer, intrafamiliar y sexual. Bogotá: INS. Recuperado de: https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsoL-nqvTMAhWB4yYKHQZAAAsQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cali.gov.co%2Fsalud%2Fdescargar.php%3Fid%3D42042&usq=AFOjCNEhf3ccULQ3zPQlGAHqsaig_xEeLA&sig2=Um6GIqGXOZNULn6Zw6gYjw&bvm=bv.122676328,d.eWE

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. (2010) Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Violencia verbal del esposo contra la mujer. Bogotá: Profamilia. Recuperado de: http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=130&limitstart=1

Redacción. (5 de agosto de 2012). Eduardo Dávila, de la élite costeña a la cárcel La Picota. El Tiempo. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12096086.html

PERIODICO EL TIEMPO CALI (23 de septiembre de 2013). Sin recursos para proteger a la mujer en Cali. El Tiempo. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13078386>

ENRIQUEZ, G. (2014). La violencia intrafamiliar en los hogares del municipio Tucupita estado delta amacuro: factores de riesgo y de Protección. Universidad Nacional Abierta. Recuperado de: <http://biblo.una.edu.ve/docu.7/bases/marc/texto/t38985.pdf>

FRANCO PATIÑO, S. M. y SÁNCHEZ VINASCO, G. I. (2014). Las familias: ¿Un asunto de políticas públicas? Cali: Universidad del Valle. Recuperado de: <http://dintev.univalle.edu.co/revistasunivalle/index.php/SyE/article/download/1729/1654>.

GALEANO REY, J. P. (2009). Políticas públicas. Bogotá. Recuperado de: <http://politicaspUBLICAScolombianas.blogspot.com/>

KOSTKA F. (sf). Políticas públicas En: Diccionario Crítico de Ciencias Sociales. Universidad Complutense de Madrid Recuperado de: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/P/politicas_publicas_b.htm

MAYA VILLAZÓN, E. J. (2007). Guía para la identificación, atención y prevención de la violencia intrafamiliar. Bogotá: Personería de Bogotá.

MUNICIPIO DE SANTA MARTA. (2012). Muertes por homicidio y maltrato intrafamiliar. Santa Marta: el Municipio, 23 de abril de 2014. p. 1. Recuperado de: http://www.santamarta-magdalena.gov.co/audio_video.shtml?apc=Cfxx-1-&x=1734472

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (1995). Convención de Belém do Pará. Washington: OEA. Recuperado de: <http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0029.pdf>

ORTIZ, Y., FRANCO, H. y CAMPO, D. (2007). Una aproximación a la medición de la violencia familiar en Santiago de Cali, 2003-2005. 55-1. doi: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-00112007000100005

SÁNCHEZ D. I. (4 de junio de 2012). 500 mujeres han sido asesinadas en lo que va corrido de 2012 en Colombia. El País. Recuperado de: <http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/caso-rosa-elvira-cely-disparo-alarmas-por-violencia-contra-mujeres>

SANTIAGO DE CALI. ALCALDÍA MUNICIPAL. (11 de diciembre de 2012). Este jueves, lanzamiento de agenda urgente de las mujeres para periodistas. Alcaldía Municipal. Recuperado de: http://www.cali.gov.co/publicaciones/este_jueves_lanzamiento_de_agenda_urgente_de_las_mujeres_para_periodistas_pub

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. (2 de octubre de 2012). Este miércoles, Primer Seminario Internacional de periodismo no sexista con la comunidad. Alcaldía Municipal. Recuperado de: http://www.cali.gov.co/publicaciones/este_mircoles_primer_seminario_internacional_de_p_eriodismo_no_sexista_con_la_comunidad_pub

SANTIAGO DE CALI. ALCALDÍA MUNICIPAL. (2012). Informe de Gestión Municipio de Santiago de Cali 2012. Alcaldía Municipal. Recuperado de: www.cali.gov.co/descargar.php?id=33373

ALCALDIA DE SANTIAGO CALI. (2004). Informes violencia familiar. Alcaldía Municipal de Cali. Recuperado de: http://www.cali.gov.co/observatorios/publicaciones/informes_violencia_familiar_pub

ALCALDIA DE SANTIAGO CALI. (2011). Términos de referencia para el desarrollo de una asistencia técnica en la realización de una investigación cualitativa para contextualizar la violencia contra las mujeres en Cali y ajustar las intervenciones interinstitucionales en la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia de género. Alcaldía Municipal de Cali. Recuperado de: www.cali.gov.co/descargar.php?id=30695

ALCALDIA DE SANTIAGO CALI. Decreto 0206 (31 de marzo de 2008). Acuerdo municipal No. 0231 de diciembre 31 de 2007. Recuperado de: www.cali.gov.co/bienestar/descargar.php?id=3521

ALCALDIA DE SANTIAGO CALI. Acuerdo 231 (31 de diciembre de 2007). Recuperado de: <http://www.concejodecali.gov.co/documentos.php?id=27>

ALCALDIA DE SANTIAGO CALI. (2008). Exposición de motivos Proyecto de Acuerdo por medio del cual se declara de interés y se adopta la política pública en convivencia familiar para el municipio de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones. Recuperado de: <http://www.cali.gov.co/bienestar/descargar.php?id=3521>

CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI (2013). Política de mujer en Cali, con muchas expectativas y pocos recursos. Cali: Oficina de Comunicaciones y relaciones Corporativas. Recuperado de: <http://www.concejodecali.gov.co/publicaciones.php?id=42038&dPrint=1>

SANTIAGO DE CALI. SECRETARÍA DE SALUD. (2004). Informe epidemiológico de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y violencia sexual. Recuperado de: <http://www.cali.gov.co/observatorios/publicaciones.php?id=2541&dPrint=1>